TRIBUNAL ELECTORAL
DE TLAXCALA

JUICIO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA.

EXPEDIENTE: TET-JDC-053/2025.

PARTE ACTORA: LAURA MARCELA RAMOS VELA, CON EL CARÁCTER DE CANDIDATA A JUEZA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA DEL ESTADO DE TLAXCALA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES.

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA SALVADOR ÁNGEL.

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, a 28 de julio de 2025.

El Tribunal Electoral de Tlaxcala dicta SENTENCIA en la que declara infundado el agravio expresado por la parte actora y, por ende, confirmar el acuerdo recurrido, en lo que fue materia de impugnación.

GLOSARIO

Actora o Parte Actora	Laura Marcela Ramos Vela.
Autoridad Responsable	Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
Acto impugnado o acuerdo impugnado	Acuerdo ITE-CG 67/2025, por el que se aprueba la designación de los cargos de juezas y jueces con ámbito territorial electivo distrital, derivado del proceso electoral local extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025.
Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Local	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
Consejo General	Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
Convocatoria General	Convocatoria General Pública para integrar los listados de las personas candidatas, que participarán en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, que ocuparán los cargos de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y de Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, emitida por el Congreso del Estado de Tlaxcala.

Convocatoria de postulaciones	Convocatoria para participar en la evaluación y selección de postulaciones de la elección extraordinaria 2024-2025 de las personas juzgadoras que ocuparán los cargos de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, así como de las Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado, emitida por el Comité Estatal de Evaluación.
Criterios de paridad	Criterios para garantizar el Principio Constitucional de Paridad de Género en el Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025.
INE	Instituto Nacional Electoral.
ITE	Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
Juicio de la Ciudadanía o JDC	Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía.
Lineamientos de asignación	Lineamientos para asignación de cargos en el Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025.
Lineamientos de cómputos	Lineamientos para regular el desarrollo de los cómputos electorales del Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025.
Ley Electoral Local	Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala.
Ley de Medios	Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala.
Ley General Electoral	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Personas Juzgadoras	Magistradas y Magistrados, así como Juezas y Jueces del Poder Judicial.
Sala Regional	Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Federal, con sede en la Ciudad de México.
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tribunal	Tribunal Electoral de Tlaxcala.

ANTECEDENTES

De los hechos narrados en la demanda, los hechos que son notorios para este Tribunal, así como de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se desprende lo siguiente:

1. Reforma al Poder Judicial. El 10 de diciembre de 2024, se publicó el Decreto número 119, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de reforma al Poder Judicial[1], en virtud de la cual, entre otras, las personas titulares de los Juzgados en materia Civil se deben elegir a través del voto en Procesos Electorales.

2. Inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025. El 17 de diciembre de 2024, el Consejo General del ITE realizó la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario para la elección de personas juzgadoras que ocuparán los cargos de Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial, así como de las Magistradas y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado[2].

3. Acuerdo ITE-CG 11/2025. El 23 de febrero de 2025, en el acuerdo ITE-CG 11/2025[3], el Consejo General determinó los criterios para garantizar el Principio Constitucional de Paridad de Género en el Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025.

4. Lineamientos de asignación. El 13 de marzo de 2025, en el acuerdo ITE-CG 22/2025[4], el Consejo General del ITE, aprobó los lineamientos para la asignación de cargos en el Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025[5].

[1] A través del Decreto ya referido, se reforman, entre otros, los artículos 83 y 84 de la Constitución Local.

[2] Lo anterior puede ser consultado en la dirección electrónica siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=KzqkdslYeyU

[3] Dicho acuerdo puede ser consultado en la dirección electrónica siguiente: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://itetlax.org.mx/assets/pdf/acuerdos/ITE/2025/11.pdf

[4] Acuerdo que puede ser consultado en la dirección electrónica siguiente: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://itetlax.org.mx/assets/pdf/acuerdos/ITE/2025/22.pdf

[5] Dichos lineamientos pueden ser consultados en la dirección electrónica siguiente: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://itetlax.org.mx/assets/pdf/acuerdos/ITE/2025/22.1.pdf

5. Lineamientos de cómputos y su modificación. El 09 de abril de 2025, el Consejo General del ITE mediante acuerdo ITE-CG 39/2025[6], aprobó los lineamientos para regular el desarrollo de los cómputos electorales[7], así como el cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos[8], ambos para el Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025.

Dicho acuerdo, lineamientos y cuadernillo, fueron modificados a través del acuerdo ITE-CG 50/2025, de 23 de mayo de 2025, para normar lo referente a candidaturas que hubieren sido sustituidas o que se encuentren en los supuestos de fallecimiento, renuncia, incapacidad, inhabilitación o declinación.

6. Jornada Electoral. El 01 de junio de 2025, se llevó a cabo la jornada electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025 en el Estado, en la cual se eligió, entre otros cargos, a las Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

7. Sumatoria total de los cómputos. El 10 de junio de 2025 el Consejo General del ITE llevó a cabo la sumatoria de los cómputos realizados por los seis Consejos Distritales Electorales, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025.

8. Acuerdo impugnado. El 11 de junio de 2025, el ITE aprobó el acuerdo ITE-CG 67/2025, por el que aprueba la asignación de los cargos de juezas y jueces con ámbito territorial electivo distrital, derivado del Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025.

9. Presentación de demanda. Inconforme con el acuerdo precisado en el párrafo inmediato anterior, el 13 de junio de 2025, la parte actora presentó demanda de Juicio de la Ciudadanía ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

[6] Acuerdo que puede ser consultado en la dirección electrónica siguiente: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://itetlax.org.mx/assets/pdf/acuerdos/ITE/2025/39.pdf

[7] Lineamientos que pueden ser consultados en la dirección electrónica siguiente: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://itetlax.org.mx/assets/pdf/acuerdos/ITE/2025/39.1.pdf

[8] Cuadernillo que puede ser consultado en la dirección electrónica siguiente: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://itetlax.org.mx/assets/pdf/acuerdos/ITE/2025/39.2.pdf

10. Remisión al TET. El 14 de junio de 2025, la autoridad señalada como responsable, presentó oficio sin número ante este Tribunal, por medio del cual emite su informe circunstanciado, al que adjuntó el escrito de demanda presentado por la parte actora.

11. Recepción y turno a ponencia. En su oportunidad, el Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó integrar el expediente **TET-JDC-053/2025**; además de que ordenó turnarlo a la Tercera Ponencia para su sustanciación, por así corresponder el turno.

12. Radicación. El siguiente 15 de junio de 2025, se radicó en la Tercera Ponencia de este Tribunal el expediente **TET-JDC-053/2025** y se tuvo por recibido el medio de impugnación.

13. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se admitió el Juicio de la Ciudadanía **TET-JDC-053/2025** y por considerar que no existía prueba o diligencia pendiente por desahogar, se declaró cerrada la instrucción en dicho medio de impugnación y se ordenó la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.

Este Tribunal es competente para conocer y resolver la controversia planteada en el presente Juicio de la Ciudadanía, en virtud de que la parte actora controvierte la asignación de los cargos de Juezas y Jueces con ámbito territorial electivo distrital en materia Civil, derivado del Proceso Electoral Local Extraordinario, para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación 2024-2025.

Lo anterior, porque la Actora esencialmente plantea que la autoridad electoral administrativa electoral en el estado de Tlaxcala le transgredió su derecho político – electoral de acceso al cargo con motivo de una elección estatal de personas juzgadoras.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 párrafo segundo fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal; 95, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Local; 1, 3, 5 fracciones I y III, 6 fracción III, 10 y 90, último párrafo, de la Ley de Medios, 1 y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala.

SEGUNDO. Escritos de personas terceras interesadas. En actuaciones consta que, en el presente asunto, se apersonaron personas terceras interesadas, al respecto, los artículos 14, fracción III y 41 de la Ley de Medios[9], establecen los requisitos que deben cumplirse para su procedencia, por lo que, a continuación, se hace el análisis correspondiente.

1. Forma. Las personas terceras interesadas comparecen a través de escritos presentados ante el ITE, en los que se hace constar el nombre de quienes promueven, que es, precisamente, las personas candidatas, que resultaron electas al cargo de Jueza en materia Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala y Juez en materia Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, ambas personas electas en el Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025, ocursos que se encuentran debidamente firmados por quienes se apersonan.

Las razones del interés legítimo en que se fundan y sus pretensiones contrarias a la parte actora se cumplen, en virtud de que tienen como intención que se confirmen sus asignaciones como personas Juzgadoras electas, respectivamente, como Jueza y Juez en materia Civil del Distrito

9

1***Artículo 14.*** *Son partes en el procedimiento, las siguientes:*

...

III. El tercero interesado que será el ciudadano, el partido político, la coalición o el candidato, que tengan un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

Artículo 41. *Los terceros interesados podrán comparecer ante el Tribunal Electoral durante el plazo de setenta y dos horas posteriores a la fijación de la cédula a que se refiere la fracción I del artículo 39 de esta Ley, mediante escrito que deberá cumplir los requisitos siguientes:*

I. Hacer constar el nombre del tercero interesado;

II. Señalar domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia del Tribunal Electoral;

III. Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la representación del compareciente;

IV. Precisar la razón del interés jurídico en que se funden y las pretensiones concretas del compareciente;

V. Ofrecer las pruebas que a su derecho correspondan. Mencionar las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas, y

VI. Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del compareciente.

Judicial de Cuauhtémoc y Zaragoza, así como que se confirmen las constancias de mayoría y validez que les fueron entregadas, respecto del proceso electoral ya precisado.

2. Oportunidad. Los escritos de los terceros interesados se presentaron en el expediente que se resuelve, dentro del plazo de setenta y dos horas que establece el artículo 41 de la Ley de Medios, como se establece a continuación:

Personas Terceras Interesadas			
Fecha de fijación de la cedula de publicidad	**Vencimiento del plazo de 72 horas**	**Presentación del escrito**	**Oportuno**
16:56 horas del 13 de junio de 2025.	16:56 horas del 16 de junio 2025.	**Angélica Flores Vázquez:** 15:47 horas del 16 de junio de 2025.	Si
16:56 horas del 13 de junio de 2025.	16:56 horas del 16 de junio de 2025.	**Osmar Eduardo Pérez Flores:** 13:12 horas del 16 de junio de 2025.	Si

3. Legitimación. La legitimación de las personas que comparecen como terceras interesadas, se acredita con el hecho de que acuden al juicio en su calidad de personas candidatas que resultaron electas como Jueza y Juez en materia Civil de los Distritos Judiciales de Cuauhtémoc y Zaragoza, respectivamente, en el Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025, lo que acreditan con las copias certificadas de las constancias de mayoría y validez de la elección de Juezas y Jueces del Poder Judicial a nivel Distrital Civil y Familiar, emitidas por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción III, de la Ley de Medios.

4. Interés legítimo. Se reconoce el interés legítimo de las personas que comparecen como terceras interesadas, ya que, como se adelantó, acuden con la intención de que se confirme el acto impugnado, lo que se traduce en un interés o derecho incompatible con la pretensión de la parte actora.

En las relatadas condiciones, al haberse acreditado que los escritos por los que comparecen a juicio Angélica Flores Vázquez y Osmar Eduardo Pérez Flores cumplen con los requisitos para ello, se les reconoce el carácter de personas Terceras Interesadas en el presente asunto.

TERCERO. Causal de improcedencia.

Previo al estudio de fondo de la controversia, es obligación de este Órgano Jurisdiccional Electoral, analizar las causales de improcedencia o de sobreseimiento que en la especie puedan actualizarse, por ser una cuestión de orden público y, por tanto, el estudio de los requisitos de procedencia, se debe realizar de forma oficiosa ya sea que se hagan valer por las partes o se adviertan de oficio, preferente y previa al análisis de fondo, por ser un requisito indispensable, para la adecuada integración de la Litis a resolver, lo que se realiza de la forma siguiente:

En este asunto, se advierte que el ITE y una de las personas terceras interesadas, hacen valer las causales de improcedencia siguientes:

Causal de improcedencia argumentada por el ITE.

De la lectura del informe circunstanciado se desprende que el ITE manifestó que el presente Juicio de la Ciudadanía es improcedente, en virtud de que la actora en sus agravios se inconforma respecto de los lineamientos para la asignación de cargos en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, así como respecto de los criterios para garantizar el Principio Constitucional de Paridad de Género en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025.

En este sentido, el ITE aduce que, el 23 de febrero de 2025 aprobó el acuerdo ITE-CG 11/2025, en el que emitió los Criterios para Garantizar el Principio Constitucional de Paridad de Género en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, mismo que le fue notificado a la actora vía correo electrónico el 15 de marzo de 2025; mientras que el13 de marzo de 2025, en el acuerdo ITE-CG 22/2025, aprobó los lineamientos para la asignación de cargos en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, el cual le fue notificado a la actora el 16 de marzo de 2025.

Así, el ITE aduce que quien promueve, debió manifestar su inconformidad en ese momento, pues para este día esos acuerdos ya se encuentran firmes, pues impugnarlos hasta el momento de su aplicación sugiere que la inconformidad de la parte actora atiende a un interés particular y no así a la inconstitucionalidad de estos; por ello, pide que este medio de impugnación sea declarado improcedente.

Causal de improcedencia argumentada por el tercero interesado Osmar Eduardo Pérez Flores.

Al respecto, **Osmar Eduardo Pérez Flores** aduce que el medio de impugnación de que se trata, es improcedente, en virtud de que la actora no impugnó los acuerdos ITE-CG 11/2025 e ITE-CG 22/2025, en los que se aprobaron los criterios para garantizar el Principio Constitucional de Paridad de Género y los Lineamientos para la Asignación de Cargos, ambos para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, por lo que se encuentran firmes.

En este sentido aduce que dichos acuerdos fueron aprobados el 23 de febrero y 13 de marzo, ambos meses de 2025, de los que la actora tuvo conocimiento formal, sin que se hayan impugnado en la oportunidad debida, por lo que dicha etapa se ha consumado y por ello tiene eficacia plena.

En este sentido, el tercero interesado pide que el presente medio de impugnación sea declarado improcedente.

Causal de improcedencia argumentada por la tercera interesada Angélica Flores Vázquez.

Por lo que se refiere a la tercera interesada **Angélica Flores Vázquez,** manifiesta que los lineamientos para la asignación de cargos en el Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025, aprobados por el ITE el 13 de marzo de 2025, en el acuerdo ITE-CG 22/2025, han quedado firmes, incluido el artículo 15 controvertido por la impugnante, al no haber sido controvertidos en el momento procesal oportuno.

Lo anterior, porque aduce que la propia actora señala que los citados lineamientos fueron aprobados por el ITE el 13 de marzo de 2025, y éstos entraron en vigor el mismo día tal y como lo establece el único transitorio de ese acuerdo, por lo que la actora se encuentra fuera de término para controvertirlos y por ello el medio de impugnación es improcedente por extemporáneo, en términos de lo dispuesto en el artículo 10, numeral 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En este tenor, señala que el numeral 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé que el término para la interposición de un Juicio de la Ciudadanía o el de Revisión Constitucional es de 4 días, además de que el artículo 7 del mismo ordenamiento legal dispone que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles; por lo que, el término para interponer algún medio de impugnación inició al día siguiente y feneció el 17 de marzo de 2025.

Por tanto, no le asiste la razón a la actora al pretender impugnar el artículo 15 de los referidos lineamientos aprobados en acuerdo ITE-CG 22/2025, por lo que resulta ser evidente que por cuanto a ese agravio resulta es extemporáneo, ya que se ha presentado después del plazo legal previsto por la ley electoral. Esto con independencia que la actora aduzca haber tenido conocimiento del acuerdo impugnado hasta la fecha en que se calificó la elección judicial.

Como es de verse, tanto el ITE como las dos personas terceras interesadas, manifestaron que, a su consideración, el presente medio de impugnación es improcedente, en virtud de que no fue presentado con la oportunidad debida, esto porque los Criterios para Garantizar el Principio Constitucional de Paridad de Género en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, fueron aprobados el 23 de febrero de 2025 en el acuerdo ITE-CG 11/2025, mientras que los lineamientos para la asignación de cargos en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, fueron aprobados el 13 de marzo de 2025, en el acuerdo ITE-CG 22/2025, sin que la actora hubiera presentado su inconformidad dentro de los cuatro días siguientes.

La causa de improcedencia es infundada porque de la causa de pedir del medio de impugnación se desprende que la Actora reclama la aplicación de las disposiciones reglamentarias aplicables en la asignación de personas

juzgadoras y magistraturas en el estado de Tlaxcala. El diseño reglamentario de asignación para la elección judicial en el estado de Tlaxcala se aprobó durante la fase de preparación de la elección, sin embargo, su aplicación a la Actora ocurrió durante la fase de asignación de cargos. En ese orden de ideas, los argumentos sobre la indebida aplicación de las disposiciones reglamentarias se materializaron en el acuerdo reclamado, por lo que el ejercicio aplicativo se debe analizar en el fondo de la controversia.

Al respecto, debe destacarse que las candidaturas a ocupar cargos de personas juzgadoras y magistraturas de elección popular no cuentan con tutela de intereses difusos como en el caso de los partidos políticos en las elecciones en que estos participan, por lo que no les es exigible la vigilancia de los actos de la autoridad administrativa, aunque no les cause una afectación jurídica directa e inmediata.

La Actora no solo controvierte la aplicación e interpretación del criterio de asignación aplicado por el ITE con base en disposiciones de los Criterios de paridad, de los Lineamientos de asignación y el principio de igualdad del voto, sino que, de su causa de pedir, también se advierte la propuesta de una interpretación en la que es posible aplicar otro criterio con base en otras disposiciones constitucionales, legislativas y reglamentarias. Al respecto, este Tribunal advierte que el problema planteado no encuentra una solución evidente conforme con los Lineamientos de asignación y los Criterios de paridad, sino que la respuesta implica la realización de un estudio que excede de una resolución de improcedencia.

Lo expuesto es consistente con lo dispuesto por el párrafo tercero de la Constitución que establece lo siguiente: *Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales*

El párrafo de referencia fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, como resultado de un profundo análisis y debate entre diversas organizaciones públicas, civiles, educativas y de impartición de justicia, entre otras.

El procedimiento legislativo deja claro los objetivos de la reforma. Al respecto, el dictamen de la Cámara de diputaciones revisora enfatizó que los formalismos procesales han generado que la justicia sea lenta y que no deja satisfecho a nadie. Por ello, se dijo "la reforma que esta dictaminadora propone a consideración de esta Soberanía cambiará de fondo el actual modelo de administrar justicia, pues obligará a todas las autoridades a estudiar los conflictos que le son planteados, no sólo desde una óptica procesal, sino con la finalidad de resolver los problemas planteados por las personas." En suma, se concluyó que la reforma acerca la justicia a las personas, responde a la imperiosa necesidad de resolver de fondo los conflictos, privilegiar la impartición de justicia y hacer efectivo el derecho a que se administre justicia de forma pronta y expedita. El dictamen de referencia también fue aprobado sin discusión ni modificación alguna.

En ese sentido, el artículo 17 constitucional, tercer párrafo, abona al derecho fundamental de tutela judicial efectiva previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, pues implica la obligación para las autoridades judiciales y aquellas con funciones materialmente jurisdiccionales de resolver los conflictos que se les planteen sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. Debiendo tener presente la razón de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.

CUARTO. Requisitos de procedencia.

Este Tribunal considera que el medio de impugnación que se resuelve cumple con los requisitos establecidos en los artículos 21 y 22, de la Ley de Medios, para su presentación y procedencia, como a continuación se demuestra:

1. **Forma.** La demanda se presentó por escrito, en ella consta el nombre de la actora, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, precisa el acto controvertido, la autoridad a la que se le imputa, expresa conceptos de agravio que le causa el acto reclamado y ofrece pruebas.

2. Oportunidad. La presentación de la demanda es oportuna, pues la parte actora tuvo conocimiento del acuerdo impugnado el 11 de junio de 2025; por lo que, el término de 4 días que refiere el artículo 19 de la Ley de Medios,

transcurrió, del 12 al 15 de junio de 2025, por ello, si la demanda fue presentada el 13 de junio de 2025, es inconcuso que el escrito de impugnación se presentó con la oportunidad debida.

3. Legitimación y personería. La actora se encuentra legitimada para promover el juicio que se resuelve, de conformidad con lo previsto en los artículos 14, fracción I y 16, fracción II, de la Ley de Medios, en virtud de que comparece como ciudadana que fue candidata a Jueza del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, en el Estado de Tlaxcala, en el Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025, pues aduce que el acuerdo impugnado le trasgrede sus derechos político electorales, ya que al llevar a cabo la asignación de los cargos de las Juezas y Jueces con ámbito territorial electivo distrital, no se observó el Principio Constitucional de Paridad de Género en la vertiente vertical.

Por lo que, acude por derecho propio a este Tribunal para que se le tutelen sus derechos, y por ello tiene legitimación para promover el presente medio de impugnación; calidad que además le reconoce la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

4. Interés legítimo. La parte actora tiene interés legítimo para promover el juicio que se resuelve, toda vez que controvierte el acuerdo ITE-CG 67/2025 del Consejo General del ITE, por el que se aprueba la asignación de los cargos de Juezas y Jueces con ámbito territorial electivo distrital, derivado del Proceso Electoral Local Extraordinario, para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025, en el que participó como candidata a Jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, pues aduce que la actuación de la autoridad responsable resulta ilegal y violatoria de sus derechos político-electorales y por ello acude a esta autoridad solicitando se le tutelen sus derechos.

5. Definitividad. Esta exigencia, también se ha satisfecho, debido a que legalmente no se encuentra establecido ningún medio de defensa previo, a través del cual, los actos impugnados pudieran ser modificados o revocados.

Por lo tanto, se cumple con el principio de definitividad que se establece como requisito de procedencia.

De los anteriores razonamientos, al haberse satisfecho los requisitos de procedencia, lo conducente es realizar el estudio del fondo del asunto planteado.

QUINTO. Perspectiva de género.

El marco normativo reconoce la existencia de diferencias estructurales entre mujeres y hombres, de ahí la introducción del principio de paridad de género en diversos artículos de la Constitución Federal[10]. Sobre dicha base normativa, se ha construido un andamiaje jurídico que tiene como objetivo reducir la brecha de desigualdad existente, mediante la participación concurrente de todos los órganos del Estado, tanto a nivel Federal como Local.

Por ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido directrices para juzgar con perspectiva de género, tal y como se deriva de la jurisprudencia 22/2016 de rubro y texto siguientes: **ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO**. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.

También es relevante la tesis XXVII/2017 de la misma Primera Sala, de rubro: **JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN**. En este criterio estableció que la perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto- que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y

[10] Artículo 2, apartado A, fracción VII; 3, párrafo decimoquinto; 32 fracción II; 41, párrafo segundo y párrafo tercero, base I, párrafos primero y segundo; 53, párrafo segundo; 56, penúltimo párrafo; 94, párrafo séptimo y octavo; 96 fracción II, inciso c), fracción IV; 100, párrafo séptimo; 115, primer párrafo, fracción I; y, 116, fracción III, párrafo cuarto.

sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino".

Así, el contenido de la obligación en comento puede resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: **"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.",** que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualquier carga estereotipada que resulte en detrimento de mujeres u hombres.

En este sentido, además de que la parte actora es mujer, este Tribunal considera necesario juzgar el presente asunto con perspectiva de género, toda vez que la materia a resolver versa sobre el cumplimiento u observancia del Principio Constitucional de Paridad de Género.

SEXTO. Cuestión previa.

Antes de estudiar el fondo del asunto, se estima pertinente mencionar el marco normativo aplicable al derecho al voto pasivo, al principio constitucional de paridad de género, así como las particularidades de las reformas constitucionales en materia de elección de personas juzgadoras, para finalmente describir las facultades reglamentarias del ITE.

Del derecho al voto pasivo.

En principio, debe decirse que, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal, la ciudadanía tiene **derecho a ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular,** teniendo las calidades que establezca la ley; es decir, en dicha

disposición normativa se establece el derecho de la ciudadanía al voto pasivo como un derecho de orden constitucional, pero de regulación legal.

Por lo que se refiere al Estado de Tlaxcala, en armonía con el numeral antes invocado, los artículos 22 fracción II de la Constitución Local y 8 fracción II, de la Ley Electoral Local, establecen a favor de la ciudadanía el derecho de ser votada, en el caso de la Constitución Local, ese numeral incluye el derecho de la ciudadanía a ser votada para ocupar los cargos de personas juzgadoras dentro del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

De las anteriores porciones normativas se desprende que la ciudadanía, tiene derecho a ser votada para ocupar algún cargo de elección popular, incluidos los diversos cargos de personas juzgadoras en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Del Principio Constitucional de Paridad de Género.

El mandato de igualdad y no discriminación por motivos de género, previsto en el párrafo quinto del artículo 1° de la Constitución Federal, debe entenderse a partir del reconocimiento de la situación de exclusión sistemática y estructural en la que se ha colocado a las mujeres de manera histórica en todos los ámbitos, incluyendo el político.

Así, el artículo 35, fracción II, establece que **el derecho a ser votada que le asiste a la ciudadanía debe ejercerse en condiciones de paridad**; mientras que en el artículo 41, fracción I, segundo párrafo, del mismo ordenamiento fundante, **se reconoce el principio de paridad de género**, el cual es una concreción del principio de igualdad y no discriminación por razón de género en el ámbito político-electoral.

En el ámbito estatal, la Constitución Local, en su artículo 25, dispone que los procesos de elección para renovar a los poderes del Estado, a los Tribunales de Justicia Administrativa y de Conciliación y Arbitraje, así como a los ayuntamientos y presidencias de comunidad electas por voto constitucional, se realizarán por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo; ordinariamente se celebrarán el primer domingo de junio de cada tres o seis años conforme a la elección que corresponda o extraordinariamente, según sean convocados y **de acuerdo a los principios y las bases que prescriben la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** y la propia Constitución Local. La ley de la materia determinará las reglas y los procedimientos aplicables.

Así, el artículo 8 de la Ley Electoral Local, establece que los derechos ahí establecidos se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género y sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El mismo ordenamiento legal, en su artículo 9 expresa que los derechos político electorales de la ciudadanía serán protegidos y garantizados conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad **e igualdad de derechos**; y **se ejercerán** libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, **sin discriminación por** origen étnico o nacional, **género**, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De los anteriores preceptos, es dable jurídicamente afirmar que la paridad de género se encuentra establecida como principio de rango Constitucional y que se desarrolla como una expresión de igualdad de derechos y no discriminación en razón del género de las personas gobernadas, postulado que también es de observancia obligatoria en la materia político-electoral.

Reforma al Poder Judicial Federal.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El quince de septiembre de dos mil veinticuatro, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. Entre otras cosas, se estableció la elección por voto popular de todos los cargos del Poder Judicial de la Federación.

Al respecto, el artículo 94, párrafo octavo, de la Constitución Federal, dispone que la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales,

observando el principio de paridad de género. La elección de las Magistradas y los Magistrados de Circuito, así como las Juezas y los Jueces de Distrito, se regirá por las bases previstas en el artículo 96 de dicha Constitución.

Por su parte, el artículo 96 del mismo ordenamiento fundante, establece que las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, **serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía** el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.

El mismo numeral, en su fracción IV, dispone que el Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y **entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres**. El Senado incorporará a los listados que remita al Instituto Nacional Electoral a las personas que se encuentren en funciones en los cargos señalados en el párrafo anterior al cierre de la convocatoria respectiva. **La asignación de los cargos electos se realizará por materia de especialización entre las candidaturas que obtengan el mayor número de votos.**

El artículo 99 de la Constitución Federal, establece que, para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Electoral funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley.

Las personas magistradas electorales que integren la Sala Superior **serán elegidas por la ciudadanía a nivel nacional conforme a las bases y al procedimiento previsto en el artículo 96 de dicha Constitución**.

Las personas magistradas electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los indicados en el párrafo anterior. **Serán elegidas por circunscripciones electorales, en los términos y modalidades que determine la ley, conforme al procedimiento aplicable para las**

magistraturas de Sala Superior, y durarán en su encargo seis años improrrogables.

En el artículo 100 de nuestra Carta Magna Federal, se dispuso que El Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; **se integrará por cinco personas electas por la ciudadanía a nivel nacional conforme al procedimiento establecido en el artículo 96 de dicha Constitución**.

Por su parte, el artículo 116 de la Constitución Federal, expresa que el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y **Judicial**, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

En su fracción III, establece que el Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de las Magistradas y los Magistrados y Juezas y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para **su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía**; la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y de un órgano de administración judicial con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, **conforme a las bases establecidas en dicha Constitución para el Poder Judicial de la Federación**.

Las Magistradas y los Magistrados y las Juezas y los Jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a IV del párrafo segundo del artículo 97 de esa Constitución y los demás que establezcan las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados.

Las propuestas de candidaturas y **la elección de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales se realizarán conforme a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala esa Constitución para el Poder Judicial de la Federación** en lo que resulte aplicable, **estableciendo mecanismos** públicos, abiertos,

transparentes, inclusivos, accesibles y **paritarios** de evaluación y selección que garanticen la participación de personas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes profesionales y académicos en el ejercicio de la actividad jurídica.

Como se puede apreciar, dicha reforma tuvo por objeto que las personas jugadoras en nuestro país, tanto en el ámbito Federal, como en el ámbito Local, fueran elegidas a través del voto libre, secreto y directo, observando el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Constitución Federal, numeral que en su fracción cuarta dispuso que el Instituto Nacional Electoral –por lo que se refiere al Poder Judicial de la Federación-, efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, lo que también resulta aplicable a nivel local por disposición expresa del artículo 116, fracción III, de la propia Constitución Federal.

Al respecto, es importante mencionar que el artículo segundo transitorio del decreto respectivo estableció que, en el año 2025, se llevaría a cabo un Proceso Electoral Extraordinario, en el que el Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer.

De igual modo, es pertinente mencionar que en el segundo párrafo del artículo octavo transitorio del decreto que se viene invocando, se estableció que las Entidades Federativas tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor de ese decreto -16 de septiembre de 2024-, para realizar las adecuaciones a sus Constituciones Locales. La renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales Locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027, en los términos y modalidades que estos determinen; en cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria del año 2025 o de la elección ordinaria del año 2027.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El catorce de octubre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

Por lo anterior, en su artículo 1, numeral 4, se estableció que la renovación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, así como las correspondientes a los **poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los Ayuntamientos en los estados de la Federación**, y de la Jefatura de Gobierno, diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México, integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México y las personas titulares de las Alcaldías, **se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo**.

Por su parte, el artículo 3, numeral 1, inciso l), dispone que, para los efectos de esa Ley se entiende por personas juzgadoras a las personas Ministras, Magistradas y Juezas que integran el Poder Judicial de la Federación, **o personas Magistradas y Juezas que integran los Poderes Judiciales Locales, electas por mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía.**

De igual modo, a dicha Ley se le adicionó un LIBRO NOVENO, denominado "De la Integración del Poder Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas, conformado por los artículos 494 al 535 de dicha ley.

Por lo que respecta a este asunto, el artículo 494 del citado ordenamiento legal, en su numeral 1, dispone que las personas Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, Magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistradas de los Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación, Juezas integrantes de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, **así como personas Magistradas y Juezas de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, serán electas por mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía** conforme a las bases, procedimientos, requisitos y periodos que establece la Constitución Federal, esa Ley y las leyes locales.

En su numeral 3, expresa que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, serán las autoridades responsables de la organización del proceso electivo, su jornada electoral y los cómputos de los resultados electorales.

Por su parte, el artículo 495, numeral 4, expresa que las personas Magistradas y Juezas de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas serán electas dentro del marco geográfico que al efecto determinen sus Constituciones y Leyes Locales, conforme a las bases y procedimientos que establece la Constitución Federal; mientras que el artículo 496, numeral 1, establece que en caso de ausencia de disposición expresa dentro de ese Libro – el libro noveno-, se aplicará supletoriamente lo dispuesto para los procesos electorales dentro de esa Ley.

Así, el artículo 497, dispone que el proceso electoral de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación es el conjunto de actos, ordenados por la Constitución y esa Ley, realizado por las autoridades electorales, los Poderes de la Unión, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial de la Federación, mismo que en términos de lo dispuesto en el artículo 498, comprende las etapas de: a) Preparación de la elección; b) Convocatoria y postulación de candidaturas; c) Jornada electoral; d) Cómputos y sumatoria; e) Asignación de cargos; y, f) La entrega de constancias de mayoría y declaración de validez de la elección.

La etapa de **asignación de cargos inicia con la identificación por el INE de las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos y la asignación de estas en cada cargo, en función de su especialización por materia y alternando entre mujeres y hombres**, y concluye con la entrega por el Instituto de las constancias de mayoría a las candidaturas que resulten ganadoras y la emisión de la declaración de validez respectiva.

Para ello, el artículo 503, establece que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. **En el cumplimiento de sus atribuciones, garantizará la observancia de** los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, así como **la paridad de género**.

El artículo 504, numeral 1, fracción XV, dispone que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitir lineamientos de aplicación general para los Organismos Públicos Locales respecto de los procesos de elección de las personas Magistradas y Juezas de los Poderes Judiciales Locales y atraer a su conocimiento cualquier asunto de su competencia en uso de su facultad de atracción.

En el artículo 529, se plasmó que, para determinar la validez o nulidad de los votos, se observarán las reglas siguientes: a) Se contará un voto válido por la marca o asiento que realice la persona votante en un recuadro de una misma boleta en favor de una candidatura claramente identificable, con independencia de que puedan emitirse dos o más votos por diversas candidaturas contenidas en una misma boleta; b) El Instituto determinará la cantidad de votos válidos que pueda emitir cada persona votante en una misma boleta, en función del tipo de elección y el número de candidaturas a elegir; c) Se contará como nulo cualquier voto depositado en la urna sin haber marcado o asentado alguna opción, o se realice de tal forma que no permita identificar el sentido de un voto.

En este sentido, el artículo 531, establece que los Consejos Distritales realizarán el cómputo de las boletas o las actas que contengan las votaciones de las elecciones de personas juzgadoras, a partir de la llegada del primer paquete y concluirá hasta que se reciba y compute el último paquete. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá los lineamientos que regulen esta etapa.

Por su parte, el artículo 532 expresa que, concluidos los cómputos de cada elección, el Consejo Distrital emitirá a cada candidatura ganadora una Constancia de Resultados, misma que contendrá los votos obtenidos dentro del Consejo Distrital respectivo. Una vez que se hayan computado la totalidad de las elecciones por parte de los Consejos Distritales, con auxilio de los Consejos Locales, se remitirán al Consejo General para que proceda a realizar la sumatoria por tipo de elección.

Así, el artículo 533, establece que, una vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realice la sumatoria final, **procederá a asignar los cargos por materia de especialización entre las candidaturas que**

hayan obtenido el mayor número de votos, observando la paridad de género, y publicará los resultados de la elección. Además, hará entrega de las constancias de mayoría a las candidaturas que resulten ganadoras y emitirá la declaración de validez respectiva.

De lo anterior, es pertinente precisar que, el artículo Primero transitorio de ese Decreto, dispone que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación –esto es, el 15 de octubre de 2024-; mientras que en el artículo Segundo transitorio del decreto respectivo, se estableció que los Congresos Locales y los Organismos Públicos Locales atenderán lo dispuesto en esa Ley y acatarán, en lo que corresponda, las resoluciones emitida por el Consejo General del INE en lo que sea aplicable a los procesos electorales locales, respecto a la renovación de los poderes Judiciales en las Entidades Federativas.

Reforma al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

En el ámbito Estatal, el 10 de diciembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 119, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de reforma al Poder Judicial.

En virtud de lo anterior, en el artículo 22, fracción II, se estableció que son derechos políticos de la ciudadanía, entre otros, poder ser votada y registrada como candidata por partido político o de manera independiente para ocupar cargos de elección popular, o ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, si reúne los requisitos que la ley establezca. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determinen las leyes aplicables. **Para la solicitud de registros y la postulación de candidaturas a cargos del Poder Judicial, y de los Tribunales de Justicia Administrativa y de Conciliación y Arbitraje se deberán cumplir los términos y requisitos establecidos en dicha Constitución y las leyes aplicables.**

En el artículo 25 se dispuso que **los procesos de elección para renovar a los poderes del Estado**, a los Tribunales de Justicia Administrativa y de Conciliación y Arbitraje, así como a los ayuntamientos y presidencias de comunidad electas por voto constitucional, **se realizarán por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo**; ordinariamente se celebrarán el primer domingo de junio de cada tres o seis años conforme a la elección que corresponda o extraordinariamente, según sean convocados y **de acuerdo a los principios y las bases que prescriben la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local**. La ley de la materia determinará las reglas y los procedimientos aplicables.

De este modo, en el artículo 83, se establecen los requisitos para que una persona pueda ser electa como Magistrada o Jueza del Poder Judicial del Estado.

En el artículo 84 se estableció que las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, las Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Juezas y Jueces, **se elegirán de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía** el día en que se realicen las elecciones estatales ordinarias del año que corresponda.

Como parte del procedimiento para dicha elección, el citado artículo, en su fracción II, establece que el Congreso del Estado publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los treinta días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, que contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir. **En el caso de Juezas y Jueces se precisará la especialización por materia y demás información que se requiera**.

Ese mismo numeral, en su fracción V, establece que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y **entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres.**

Resulta necesario mencionar que, en el ARTÍCULO PRIMERO transitorio del decreto en comento, se estableció que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, esto es el 11 de diciembre de 2024.

Por su parte, en el ARTÍCULO SEGUNDO transitorio, de dicho Decreto, se dispuso que el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de su entrada en vigor. En dicha elección se elegirán la mitad de los cargos de Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial; así como todos las Magistradas y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Para el caso de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada Distrito Judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección ordinaria del año 2027.

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo y vigilancia del proceso electoral extraordinario del año 2025 y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales federales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso.

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y **entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres**, **iniciando por mujer**.

Asimismo, se considera pertinente precisar que el ARTÍCULO SÉPTIMO transitorio del decreto ya mencionado, establece que el Congreso del Estado tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a las leyes locales que correspondan para dar cumplimiento al mismo. **Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia y, supletoriamente, las leyes en materia electoral en todo lo que no se contraponga a dicho Decreto.**

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala.

De igual modo, el 10 de diciembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 121, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala.

Así, el artículo 1 establece que las disposiciones de esa Ley son de orden público y de observancia general en el territorio del Estado de Tlaxcala. Tienen por objeto regular la función estatal de **organizar las elecciones para la renovación de los poderes** Legislativo, Ejecutivo y **Judicial**, de los Tribunales de Justicia Administrativa y de Conciliación y Arbitraje, así como los ayuntamientos y presidencias de comunidad; así como lo relativo a los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos en el Estado de Tlaxcala. **La renovación de los cargos se llevará a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, bajo los principios de sufragio universal, libre, secreto y directo.**

En este tenor, en el artículo 6 Bis, se dispuso que el ITE, los partidos políticos, los comités de evaluación, las personas precandidatas y candidatas, **deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de sus derechos político-electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres**; mientras que en el artículo 17 se establecieron los requisitos que deben cumplir las personas que aspiren a ser Juzgadoras.

Por su parte, el artículo 20 expresa que el ITE es el depositario de la autoridad electoral de carácter político administrativo dentro del régimen interior del Estado: es responsable del ejercicio de la función estatal de preparación, organización, desarrollo, vigilancia y validez de los procesos de elección para renovar los poderes del Estado, y los Tribunales de Justicia Administrativa y de Conciliación y Arbitraje, los ayuntamientos y las presidencias de comunidad, y de la salvaguarda del sistema de partidos políticos y de los derechos político electorales de los ciudadanos; así como de los procesos de consulta ciudadana, de acuerdo con lo que prescriben la Constitución Federal, la Local y las leyes aplicables.

Sobre el particular, el artículo 51, fracción XLV Bis, dispone que el Consejo General del ITE tendrá, entre otras, la atribución de efectuar los cómputos de la elección de las Personas Juzgadoras, publicar los resultados y entregar las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres.

El artículo 109, fracción IV, establece que los procesos de elección ordinaria en el Estado de personas juzgadoras se llevarán a cabo en los términos establecidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la jornada electoral se verificará el primer domingo del mes de junio del año que corresponda, mientras que el último párrafo del artículo 110, dispone que las elecciones para ocupar cargos de Personas Juzgadoras se sujetarán al procedimiento establecido en el artículo 84 de la Constitución Local y en esa Ley.

De igual modo, se adicionó un LIBRO SEXTO, denominado "De la Integración del Poder Judicial del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.", que comprende del artículo 395 al artículo 458.

El artículo 395, dispone que las personas Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado, **serán electas por mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía** conforme a las bases, procedimientos, requisitos y periodos que establece la Constitución Local, esa Ley y demás normatividad aplicable. El ITE será la autoridad responsable de la organización del proceso electivo, su jornada electoral y los cómputos de los resultados electorales.

En este orden de ideas, el artículo 396, establece que las personas Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado, serán electas dentro del marco geográfico que al efecto determine la legislación en la materia, conforme a las bases y procedimientos que establece la Constitución.

En caso de ausencia de disposición expresa dentro de ese Libro, se aplicará supletoriamente lo dispuesto para los procesos electorales de renovación del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Ayuntamientos, previstos de esa Ley.

Por lo anterior, el artículo 397, establece que el proceso electoral de las Personas Juzgadoras del Estado, es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Local y esa Ley, realizado por las autoridades electorales, los Poderes del Estado, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial del Estado; de forma particular, el artículo 398, expresa que para los efectos de esa Ley, el proceso de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, comprende las siguientes etapas: I. Preparación de la elección; II. Convocatoria y postulación de candidaturas; III. Jornada electoral; IV. Cómputos y sumatoria; V. Asignación de cargos, y VI. La entrega de constancias de mayoría y declaración de validez de la elección.

Para este asunto, es importante la etapa de asignación de cargos, que en términos de lo dispuesto en el artículo 399, **inicia con la identificación por el ITE de las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos y la asignación de estas en cada cargo, en función de su especialización por materia y alternando entre mujeres y hombres**.

En el artículo 407, se dispuso que es derecho de la ciudadanía participar en igualdad de condiciones en los procesos de evaluación y selección de candidaturas para todos los cargos de elección del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Dichos procesos serán públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y deberán garantizar la participación de todas las personas interesadas que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la Constitución Local y esa Ley.

De igual modo, en el artículo 421, se estableció que **el ITE es la autoridad responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la elección de Personas Juzgadoras del Estado**. En el cumplimiento de sus atribuciones, **garantizará la observancia de los principios** de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, así como **la paridad de género**.

En cuanto a las atribuciones del ITE, el artículo 422, fracciones II, IV, V y XIV, establecen que corresponde a su Consejo General: Aprobar los lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización, desarrollo y cómputo de la elección; Llevar a cabo la elección de conformidad

con el ámbito territorial que determine el Órgano de Administración Judicial; Realizar los cómputos de la elección; Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones establecidas en ese artículo y las demás que establezcan las leyes.

Así, el artículo 452, dispone que los Consejos Distritales realizarán el cómputo de las boletas o las actas que contengan las votaciones de las elecciones de personas juzgadoras, a partir de la llegada del primer paquete y concluirá hasta que se reciba y compute el último paquete. Al respecto, el artículo 453, expresa que, concluidos los cómputos de cada elección, se emitirá a cada candidatura ganadora una Constancia de Resultados, misma que contendrá los votos obtenidos dentro del Consejo Distrital respectivo. Una vez que se hayan computado la totalidad de las elecciones se remitirán al Consejo General para que proceda a realizar la sumatoria por tipo de elección.

Por su parte, el artículo 454, establece que, una vez que el Consejo General del ITE realice la sumatoria final, **procederá a asignar los cargos** por materia de especialización **entre las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos, observando la paridad de género,** y publicará los resultados de la elección. Como consecuencia de lo anterior, el artículo 455, dispone que el ITE hará entrega de las constancias de mayoría a las candidaturas que resulten ganadoras y emitirá la declaración de validez respectiva.

De la Facultad reglamentaria del ITE.

En principio, debe precisarse que en términos de lo dispuesto en el artículo 51, fracciones I, VIII, LVII, de la Ley Electoral Local, establecen que es facultad del CG del ITE vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, aprobar todo lo relativo a la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y validez de los procesos electorales, garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos político electorales de las mujeres.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XV del artículo 51 de la Ley Electoral Local, el CG del ITE, tiene la facultad de expedir, entre otros, los reglamentos necesarios para su funcionamiento; facultad que de forma particular a la elección de personas juzgadoras le es

reafirmada en el artículo 422, fracciones II y XIV, que establecen que corresponde al ITE aprobar los lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización, desarrollo y cómputo de la elección, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones establecidas en ese artículo y las demás que establezcan las leyes.

Así, el 23 de febrero de 2025, el Consejo General del ITE emitió el acuerdo ITE-CG 11/2025 por el que aprobó los Criterios para Garantizar el Principio Constitucional de Paridad de Género en el Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025.

En dichos criterios, en el apartado identificado con la letra "**D**" denominado "**Asignación.**", en el **Criterio 3**, se estableció que, para la asignación de las Juezas y Jueces cuyo ámbito territorial electivo es distrital, se observará lo siguiente: a) Para cada uno de los juzgados, se ordenarán por materia o especialización sus respectivas candidaturas y por género conforme al número de votos obtenidos en orden descendente, es decir, una lista de mujeres y otra de hombres. b) Si de los cargos en la misma materia o especialización existieran dos o más vacantes, se iniciará la asignación por la mujer más votada, posteriormente para cumplir con la alternancia de género, se asignará al hombre más votado y así sucesivamente hasta integrar la totalidad de los cargos vacantes lo anterior de conformidad con las listas que fueron generadas para el respectivo cargo. c) Si únicamente existiera una vacante, podrá asignarse inicialmente a la persona con mayor número de votos, independientemente del género. d) Se realizará una verificación de paridad de género del total de cargos de juezas y jueces asignados inicialmente por ámbito territorial electivo. Si del ejercicio se advirtiera que es mayor el número de jueces en el ámbito territorial electivo, sobrerrepresentándose los hombres, podrán realizarse los ajustes necesarios con la finalidad de garantizar la paridad de género, asignándose la vacante del cargo a la mujer con mayor número de votos en la materia o especialización respectiva. El ajuste deberá iniciar por los hombres con menor número de votos de los cargos de una sola vacante.

En el **Criterio 4,** Se estableció que en los casos en los que la totalidad de cargos asignados por ámbito territorial sea un número non, podrán ser

asignados inicialmente más hombres que mujeres, siempre que la diferencia no sea mayor de uno. Esta regla no se aplicará en el caso de que la mayoría sea en favor de mujeres.

De igual modo, en el **Criterio 5.**, se dispuso que el ITE garantizará el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género en la asignación de todos los cargos renovados en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025.

Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el ITE aprobó el acuerdo ITE-CG 22/2025, por el que se aprueban los Lineamientos para la Asignación de Cargos en el Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025.

En su artículo 10, se dispuso que en la asignación de todos los cargos y vacantes del Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, se seguirá el orden establecido en el artículo 6 de esos Lineamientos, y **se realizará con las personas candidatas que hayan obtenido el mayor número de votos de la lista que corresponda al mismo cargo, materia o especialización y ámbito territorial electivo, intercalando entre mujeres y hombres hasta integrar la totalidad de las vacantes**.

Por su parte, el artículo 11, dispone que, **en los cargos con más de una vacante,** se iniciará la asignación con la mujer que tenga el mayor número de votos de la lista que corresponda al mismo cargo, materia o especialización y ámbito territorial electivo, posteriormente se asignará al hombre más votado y así sucesivamente hasta integrar la totalidad de los cargos vacantes. Mientras que el artículo 12 establece que, **en los cargos con una sola vacante,** será asignada de manera inicial, la persona con mayor número de votos de la lista que corresponda al mismo cargo, materia o especialización y ámbito territorial electivo.

Posterior a ello, en el artículo 13, se dispuso que, si de la asignación inicial realizada del procedimiento referido en los artículos 10, 11 y 12 de dichos Lineamientos, resultase una mayor incidencia en la asignación de las mujeres, en aras de garantizar una igualdad sustantiva, en términos cualitativos y cuantitativos, se respetará la paridad flexible en observancia a los Criterios de Paridad.

Además de lo anterior, en el artículo 14 se estableció que, una vez realizada la asignación inicial, se verificará la paridad de género vertical de conformidad con los Criterios de paridad. Por ello, en el artículo 15, se expresó que, si de la verificación anterior, se advierte que **no se cumple la paridad de género** vertical, se procederá a realizar los ajustes necesarios, **asignando la vacante del cargo a la mujer con mayor número de votos**, de la elección del mismo cargo, materia o especialización y ámbito territorial electivo **donde se encuentre el hombre con el menor porcentaje de votación emitida en la elección respectiva**.

Por su parte, el artículo 16, expresa que, una vez que se ha dado total cumplimento a la paridad vertical, se procederá a verificar la paridad de género horizontal, misma que se realizará por cargo y ámbito territorial. Mientras que el artículo 17 establece que, si de la verificación anterior, se advierte que no se cumple la paridad de género horizontal, se procederá a realizar los ajustes necesarios, asignando la vacante del cargo a la mujer con mayor número de votos, iniciando por el hombre con el menor número de votos de los cargos de una sola vacante.

SÉPTIMO. Estudio de fondo.

I. Causa de pedir.

El tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución establece que, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. La disposición de que se trata constituye una directriz a los órganos jurisdiccionales para que, en la mayor medida posible, hagan prevalecer el acceso a la justicia sobre cuestiones que, sin justificación, impidan el estudio de lo planteado en los casos concretos.

Al respecto, es aplicable por igualdad de razón la jurisprudencia *3/2000* de la Sala Superior, de rubro y texto siguientes: ***AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.-*** *En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi*

factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.

En apego a los principios de acceso a la jurisdicción y de tutela judicial efectiva contenidos en los artículos 17, párrafo segundo, de la Constitución; 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los jueces nacionales deben tomar medidas que faciliten que los planteamientos de los justiciables reciban un tratamiento tal, que otorguen la máxima protección posible de sus derechos.

Para alcanzar tal objetivo, no debe atenderse únicamente a la literalidad de sus afirmaciones, sino al sentido integral de estas y, en caso de que el marco jurídico lo permita, a considerarlos en la forma que más les favorezca.

Lo expuesto debe entenderse aplicable dentro de los límites establecidos en la fracción VI del artículo 91 de la Ley de Medios que dispone que no operará la suplencia de la queja en los casos de las impugnaciones en que se alegue una violación al derecho político – electoral de ser votado a alguno de los cargos del Poder Judicial del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa o de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, electos por votación libre, secreta y directa.

II. Síntesis de agravios y pretensión de la Impugnante.

En acatamiento al principio de economía procesal y por no constituir un deber jurídico a cargo de este Tribunal su inclusión en el texto del presente fallo se estima innecesario transcribir los agravios expresados por la parte actora, más cuando se tiene a la vista en el expediente para su debido análisis; no obstante, y con la finalidad de resolver con claridad el presente asunto, se realiza la síntesis correspondiente.

En este tenor, es oportuno mencionar que los agravios se obtienen a partir de una lectura integral del escrito de demanda, con la finalidad de dar respuesta a todos los motivos de inconformidad, y se debe atender preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que expresamente adujo la actora, para estar en posibilidad de analizar y resolver la verdadera intención de la justiciable, para lograr de forma completa la impartición de justicia. Sirve de apoyo, el criterio jurisprudencial número 2/98, cuyo rubro es: "**AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL**[11].

Contexto.

En la elección judicial celebrada en el presente año en el estado de Tlaxcala, se sometieron a elección, entre otros, los cargos de personas juzgadoras en los distritos judiciales de Cuauhtémoc y Zaragoza en la especialidad de la materia *civil*. En cada uno de los distritos judiciales se eligió una sola vacante.

La Actora se postuló como candidata a jueza de la especialidad civil en el distrito judicial de Zaragoza.

El INE, mediante Acuerdo INE/CG220/2025 determinó que las elecciones de personas juzgadoras en Tlaxcala se realizarían en los distritos judiciales fijados en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, sin que hubiera sido posible observar el criterio de **equilibrio poblacional** que permitiera una **distribución equitativa** de la población dentro de cada unidad del Marco Geográfico Electoral.

La jornada electoral se desarrolló en esas circunstancias.

[11] **AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.-** Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada.

El ITE, al asignar los cargos de personas juzgadoras en la especialidad civil en los distritos judiciales de Cuauhtémoc y Zaragoza, otorgó el cargo a las candidaturas más votadas.

Las dos candidaturas asignadas inicialmente fueron del género masculino, por lo que, en observancia al principio de paridad de género, el ITE desplazó a la candidatura masculina con menor porcentaje de votación calculada sobre la votación total emitida para que la candidatura femenina más votada en el distrito ocupara el cargo. El desplazamiento recayó en la candidatura masculina del distrito judicial de Cuauhtémoc, por lo que la candidata más votada en esa demarcación accedió al cargo de jueza en la especialidad civil.

De tal suerte que, la Actora, candidata a jueza de la especialidad civil en el distrito judicial de Zaragoza, no accedió al cargo al quedar firme la candidatura del género masculino en su distrito por tener mayor porcentaje de votación que la candidatura del mismo género en el distrito judicial de Cuauhtémoc.

La Actora promovió un medio de impugnación en el que, en esencia, controvierte el método que el ITE utilizó para desplazar a la candidatura de hombre en el distrito judicial de Cuauhtémoc, porque desde su enfoque, debió realizarse ese ajuste en el distrito judicial de Zaragoza y, como candidatura femenina más votada en ese distrito, acceder al cargo.

A. Síntesis de agravios.

Ahora bien, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se desprende el siguiente agravio:

AGRAVIO ÚNICO. El método utilizado por el ITE para realizar el ajuste de paridad en la elección de personas juzgadoras especializadas en materia civil en los distritos judiciales de Cuauhtémoc y Zaragoza es contrario a Derecho y afecta su derecho a obtener el cargo de jueza por las razones siguientes:

- El ITE utilizó indebidamente un parámetro porcentual para justificar el desplazamiento de la candidatura masculina del distrito de Cuauhtémoc para dar cabida a la candidatura mujer más votada de ese distrito, pues, conforme a las normas constitucionales y legales

aplicables, debió haberse utilizado como criterio el número de votos obtenidos por cada una de las candidaturas de hombres y desplazar a la que tuviera menos votos.

- El ITE utilizó indebidamente la votación total emitida para calcular el porcentaje de cada una de las candidaturas de hombre inicialmente asignadas en cada distrito, pues debió haber utilizado la votación total válida, al tratarse de la conformada por las personas que sufragaron por alguna de las opciones postuladas, y porque es la votación que se utiliza en nuestro sistema jurídico.

La Actora no tiene razón por lo siguiente:

- De las Constituciones federal y local, y las disposiciones legales aplicables, se desprende la directriz normativa de que las candidaturas electas serán las que obtengan la mayor cantidad de votos y que en la asignación deberá observarse la paridad de género. En el caso, **la candidatura se asignó a la candidatura más votada** en el distrito judicial de Cuauhtémoc **y a la candidatura más votada** en el distrito judicial de Zaragoza. Las candidaturas electas fueron del género masculino, por lo que, en aplicación del principio de paridad y las reglas derivadas, correspondió desplazar una de las 2 candidaturas masculinas a favor de la **candidatura femenina más votada** en el distrito en el que se hizo el ajuste. La determinación no es contraria a la Constitución ni a la ley, pues armoniza la directriz de otorgar el triunfo a las candidaturas más votadas, con el principio de paridad de género y con el derecho a ser votado y de acceder al cargo, así como con el principio democrático. Esto, al asignarse el cargo judicial a la mujer más votada en el lugar en el que se encontró la candidatura masculina con menor representatividad, con lo que se eligió un juez y una jueza en materia civil.

- Es conforme a Derecho el parámetro porcentual utilizado para determinar cuál de las dos candidaturas masculinas que inicialmente fueron asignadas por haber obtenido el mayor número de votos debía ser desplazada. Esto, pues las condiciones de participación en cada

uno de los dos distritos involucrados fueron diversas al conformarse por un número de votantes no equivalente dada la gran diferencia entre ambas cantidades. En esas condiciones, el criterio porcentual es un método idóneo para comparar votaciones inicialmente no equivalentes. El criterio porcentual justifica la intervención grave del principio de paridad sobre el derecho a ocupar un cargo de elección popular de la candidatura masculina sobre la que recae el desplazamiento, y sobre el principio democrático en su aspecto de preeminencia de la decisión mayoritaria. Esto porque el criterio porcentual permite determinar la representación real de cada candidatura en su distrito, a partir de lo cual se ubica a la candidatura menos representativa, sobre la que recaerá el desplazamiento y se asigna el cargo a la candidatura de mujer más votada en la demarcación.

- El porcentaje calculado sobre la votación total emitida proporciona resultados más cercanos a la representatividad real que el basado en la votación válida. El desplazamiento de una candidatura entre dos posibilidades que inicialmente obtuvieron la mayor cantidad de votos en su distrito debe justificarse con razones sólidas, pues incide en el derecho humano a ser votado de una persona candidata que obtuvo la mayoría de los votos en una de las demarcaciones, así como en el principio democrático en el aspecto de que las personas electas popularmente sean las más votadas. La representatividad real de cada una de las candidaturas en el caso que se resuelve no se puede obtener a partir del número de votos de cada una de las candidaturas masculinas, sino a partir de las condiciones en que participaron; destacadamente, a partir del número de votos que estuvieron en disputa en cada distrito. La votación total emitida se compone de un número mayor de votantes en la demarcación que en el caso de la votación total válida, es decir, la votación total emitida es un conjunto más próximo al número total de personas con derecho a voto en la demarcación, parámetro con base en el cual es posible calcular de mejor forma el valor de cada voto en relación con el otro distrito a comparar y, por tanto, la representatividad real de cada candidatura en su distrito a partir del número de votos que obtuvo cada una. En ese sentido, no es pertinente en este caso descartar los votos nulos, pues no se trata de un diseño para asignar escaños por

representación proporcional, sino de obtener la representación real de cada candidatura de hombre para justificar el desplazamiento.

- El método utilizado por el ITE es sustancialmente consistente con la Constitución y con la ley, por lo que las disposiciones reglamentarias contenidas en los Criterios de paridad y en los Lineamientos de asignación deben entenderse en el sentido de que en casos donde deba realizarse un desplazamiento de candidaturas de hombre pertenecientes a distritos no comparables por sus diferencias en el número de personas registradas en la lista nominal, el ajuste debe realizarse sobre el candidato con menor representatividad calculada mediante la obtención del porcentaje de votación obtenido a partir de la votación total emitida.

B. Pretensión de la Impugnante.

La pretensión de la Actora es que se revoque el Acuerdo ITE-CG 67/2025, en la parte en la que se asigna el cargo de juzgadora de la especialidad civil a la candidata más votada en el distrito judicial de Cuauhtémoc y se le otorgue a ella por ser la mujer más votada en el distrito judicial de Zaragoza, demarcación en la que, desde su perspectiva, debía realizarse el ajuste de paridad mediante el desplazamiento del candidato inicialmente asignado por haber obtenido el mayor número de votos en la demarcación.

III. Método de análisis y resolución de la controversia.

Los planteamientos expresados por la impugnante en su único agravio se estudiaran en forma conjunta, en virtud de que guardan estrecha relación entre sí; en el entendido de que el orden o forma en que se analicen, no causa perjuicio, conforme a la jurisprudencia número 4/2000, de rubro **AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN**[12], que en esencia determina que no le causa agravio a quien

[12]**AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.-** El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

impugna el orden de estudio de los motivos de inconformidad planteados, siempre que sean analizados y resueltos cada uno de ellos.

Conforme a lo antes dicho, en primer lugar, se precisarán los problemas jurídicos por resolver, luego se enunciará la solución, enseguida la demostración y finalmente la conclusión.

Problemas jurídicos por resolver.

En este orden de ideas, en el presente asunto, tenemos que los problemas jurídicos por resolver son los siguientes:

1. Determinar si fue conforme a Derecho que el ITE utilizara un parámetro porcentual en vez de uno conforme a votos, para realizar el ajuste de paridad mediante el desplazamiento de la candidatura masculina que tuviera el menor porcentaje entre los distritos judiciales de Cuauhtémoc y Zaragoza.

2. Determinar si fue conforme a Derecho que el ITE calculara el porcentaje para realizar el ajuste de paridad con base en la votación total emitida en vez de la votación total válida.

Demostración.

Presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad y congruencia externa en las resoluciones.

Uno de los pilares sobre los que se ha construido el derecho electoral en nuestro país, es el de la presunción de validez de los actos administrativo-electorales. Al respecto, es relevante señalar que, como cualquier acto jurídico, el acto jurídico electoral se integra por una serie de elementos que lo dotan de existencia, validez y eficacia, una vez actualizados los cuales, surte todos sus efectos en el mundo jurídico.

Como es de explorado derecho, una de las especies de los actos de las autoridades administrativas, son los emitidos por las autoridades administrativas electorales[13], los cuales tienen una finalidad protectora del

[13] Como el INE y los órganos públicos locales electorales (OPLES u OPLs) como el ITE.

interés público, esto es, tienen un objetivo favorecedor de la colectividad al estar vinculados con las funciones estatales, razón por la cual, una vez dictados conforme a Derecho, es interés de la sociedad que prevalezcan, pues de ello depende la satisfacción y garantía de diversos derechos.

En ese orden de ideas, el interés público puede definirse como el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado. Es de interés público entonces cuestiones de la mayor relevancia colectiva, como la salud, la educación, la seguridad pública, entre otras, y la declaración de validez de las elecciones, pues es muy importante para la vida pública el contar con autoridades electas que ocupen los cargos de elección popular.

Entonces, cuando una autoridad administrativa electoral emite un acto de forma válida, es de interés público y colectivo que produzca todos sus efectos, pues de ello depende la satisfacción de dicho interés[14] al asegurar, por ejemplo, que se declare la existencia de autoridades electas, y que estas asuman el cargo en la fecha normativamente establecida, evitando con ello la posibilidad de un vacío de poder que se pueda traducir en inestabilidad y otros efectos perniciosos.

Lo anterior, por supuesto, no significa que, si se dan las condiciones necesarias, no sea posible invalidar el acto administrativo electoral, pero sí significa que, dada la importancia de su permanencia para la colectividad, debe subsistir y producir todos sus efectos mientras no se demuestre causa suficiente que justifique lo contrario. De ahí la presunción de validez, esto es, de constitucionalidad y legalidad, de actos jurídicos electorales como la asignación de cargos en la elección de personas juzgadoras.

Sobre la base de lo anterior, lo establecido en un acto administrativo electoral surte todos sus efectos mientras no exista una declaración de invalidez o revocación parcial o total. En ese sentido, un acto administrativo emitido es

[14] En ese sentido, el acto jurídico electoral comparte en esencia la naturaleza de actos administrativos de otra índole, como la orden de construir un hospital, de clausurar una obra peligrosa o de invertir recursos en educación, los cuales son inmediatamente ejecutables, pues con ello se satisfacen bienes jurídicos colectivos de la mayor importancia.

la verdad legal, con todos los efectos implicados, como el deber de acatamiento de todas las personas vinculadas por su contenido.

En el caso concreto, la Actora impugna el Acuerdo ITE-CG 67/2025 por el que se asignaron los cargos de juezas y jueces conforme a los fundamentos normativos y los procedimientos que consideró aplicables.

En ese sentido, lo aprobado en el acuerdo referido tiene presunción de constitucionalidad y legalidad mientras no se demuestre lo contrario en todo o en parte.

Por otro lado, las decisiones jurisdiccionales deben atender al principio de congruencia en los términos que en los siguientes párrafos se precisan.

En efecto, el artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia debe ser pronta, completa e imparcial, en los términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia de la resolución, así como la exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación correspondientes.

El principio de congruencia de las sentencias consiste en que, al resolver una controversia, el órgano competente debe atender a lo planteado por las partes, sin omitir algo, ni añadir circunstancias no hechas valer; la sentencia tampoco debe contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, o los resolutivos entre sí.

Con relación a la congruencia de la sentencia, la Sala Superior ha considerado que se trata de un requisito que, si bien es de naturaleza legal, por regla, es siempre impuesto por la lógica, sustentada en el principio dispositivo del proceso, que obliga tanto a los órganos jurisdiccionales como a los órganos partidistas competentes para ello, a resolver de acuerdo con lo argumentado y probado por las partes en juicio, lo cual, por regla, les impide ocuparse de aspectos que no han sido planteados por las partes.

En este orden de ideas, se tiene que:

a) El fallo o resolución no debe contener más de lo pedido por las partes.

b) La resolución no debe contener menos de lo pedido por las partes.

c) La resolución no debe contener algo distinto a lo pedido por las partes.

Al respecto, Hernando Devis Echandía[15], en su obra, afirma que la congruencia es un principio normativo que exige la identidad jurídica entre lo resuelto por el juez en la sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por las partes.

Es oportuno señalar que el requisito de congruencia de la sentencia ha sido estudiado desde dos perspectivas diferentes y complementarias, como requisito interno y externo del fallo. En la primera acepción, la congruencia se entiende como la armonía de las distintas partes constitutivas de la sentencia, lo cual implica que no debe haber argumentaciones y resolutivos contradictorios entre sí, ni contradicción entre las consideraciones o entre los resolutivos entre sí.

En su aspecto externo, la congruencia de la sentencia es la correspondencia o relación entre lo alegado por las partes y lo considerado y resuelto por el tribunal. Al respecto, es ilustrativa la siguiente tesis del Poder Judicial de la Federación: ***SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN.***- *El principio de congruencia en una sentencia de primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por el inferior.*

[15] Teoría General del Proceso, tercera edición, Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina, reimpresión del año 2004, página 76.

Sobre tales bases, el asunto de que se trata se resolverá dentro de los márgenes de la causa de pedir del medio impugnativo, el principio de congruencia y la presunción de constitucionalidad y legalidad de la asignación de personas juzgadoras en los distritos judiciales de Cuauhtémoc y Zaragoza.

Caso concreto.

Acuerdo ITE-CG 67/2025.

El Acuerdo impugnado determinó la asignación de los cargos de juezas y jueces con ámbito territorial electoral distrital, derivado del proceso electoral local extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2024-2025.

En el Acuerdo impugnado se establece que en la elección judicial extraordinaria se someterían a votación 23 cargos de personas juzgadoras, 17 de los cuales se eligieron a nivel distrital. Las 17 vacantes de personas juzgadoras se dividieron en las siguientes especialidades: **civil**, familiar, civil – familiar, penal y penal especializado en justicia para adolescentes. En la materia civil, se sometieron a votación una vacante en el distrito judicial de Cuauhtémoc y una vacante en el distrito judicial de Zaragoza.

El ITE realizó la sumatoria en cada distrito de vacantes para juzgado civil, haciendo constar los votos nulos en cada demarcación. A continuación, aplicó el procedimiento de asignación de cada cargo por especialidad.

En el caso de los juzgados en materia civil, asignó los cargos a las candidaturas más votadas que resultaron ser del género masculino. Posteriormente, al analizar la paridad, advirtió que fueron nombrados dos candidatos, por lo que hubo que desplazar a uno de los 2 para otorgar el cargo a la mujer más votada del distrito en que se realizara el ajuste.

El ITE realizó el ajuste mediante un criterio proporcional. La decisión se justificó con base en el inciso d) del tercer criterio de paridad de los Criterios de paridad, los artículos 14 y 15 de los Lineamientos de asignación, bajo el argumento de que la utilización del porcentaje de votación busca que cada voto tenga el mismo valor, ya que los distritos judiciales no se conformaron de acuerdo con el criterio de equilibrio poblacional, lo que conllevaría una mejor comparabilidad entre las candidaturas de distintos distritos,

minimizando las distorsiones causadas por las diferencias en el número de la ciudadanía y la participación electoral.

Sobre la base de ese criterio, el ITE calculó el porcentaje de votación de cada candidato con base en la votación total emitida en cada distrito. El candidato del distrito de Cuauhtémoc tuvo menor porcentaje, por lo que se le desplazó para otorgar el cargo a la candidata mejor votada[16]. Por lo tanto, la candidatura de hombre en el distrito judicial en que contendió la Actora mantuvo su posición.

Planteamientos de la Actora.

La Actora, en esencia, cuestiona el método utilizado por el ITE para realizar el ajuste de paridad en la elección de personas juzgadoras especializadas en materia civil en los distritos judiciales de Cuauhtémoc y Zaragoza, al afirmar que es contrario a Derecho y afecta su derecho a obtener el cargo de jueza. Esto por las siguientes razones:

- El ITE indebidamente utilizó un parámetro porcentual para justificar el desplazamiento de la candidatura masculina del distrito de Cuauhtémoc para dar cabida a la candidatura de mujer más votada del distrito, pues conforme a las normas constitucionales y legales aplicables, debió usarse como criterio el número de votos obtenidos por cada una de las candidaturas masculinas y desplazar a la que tuviera menos votos.

- El ITE indebidamente utilizó la votación total emitida para calcular el porcentaje de cada una de las candidaturas masculinas inicialmente asignadas en cada distrito, pues debió utilizar la votación total válida al tratarse de la conformada por las personas que sufragaron por alguna de las opciones postuladas y porque es la votación que se utiliza en nuestro sistema jurídico.

En efecto, de la causa de pedir del medio de impugnación se desprende que la Actora se inconforma de que el ITE haya utilizado en el Acuerdo

[16] Alberto Mejía García, candidato del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, obtuvo el 22.75% de la votación emitida, mientras que Osmar Eduardo Pérez Flores, candidato del Distrito Judicial de Zaragoza, obtuvo el 24.04 % de la votación emitida.

impugnado el criterio porcentual contenido en el artículo 15 de los Lineamientos de asignación para detectar a la candidatura menos representativa, en lugar de usar el criterio con base en votos.

La inconformidad se funda en que el diseño normativo establece que los ajustes de paridad deben hacerse con base en el número de votos obtenidos por las candidaturas, específicamente: que las constancias de mayoría deben entregarse a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos contemplando el principio de paridad al tener que asignar alternadamente los cargos entre hombres y mujeres.

La Actora basa su argumento en diversas disposiciones de la Constitución federal, de la Constitución de Tlaxcala, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala, es decir, en disposiciones cuya fuente son legislaturas elegidas democráticamente.

Luego, la Actora señala que el ITE, en ejercicio de su facultad reglamentaria, emitió el Reglamento de paridad. La Actora destaca el contenido del inciso d) del criterio 3 de los Criterios de paridad. Esto, en cuanto establece que el ajuste a favor de la candidata más votada que corresponda debe iniciarse en los hombres con el menor número de votos en casos de asignaciones de personas juzgadoras cuyo ámbito territorial sea distrital y se advierta un mayor número de jueces que de juezas.

La Actora también destaca que la disposición reglamentaria es consistente con las normas constitucionales y legales que establecen que en la asignación de cargos debe asignarse al candidato con mayor número de votos, que se refiere a los votos válidos obtenidos por cada candidato.

A continuación, la Actora establece que a pesar de que el esquema normativo de asignación era correcto, el ITE emitió el artículo 15 de los Lineamientos de asignación, que establece que el ajuste debe realizarse en el ámbito donde se encuentre el hombre con menor porcentaje de votación emitida en la elección respectiva. En consecuencia, la disposición reglamentaria sería contraria a la Constitución y a la ley por establecer un parámetro distinto al mayor número de votos para asignar.

La Actora también implica en su argumentación que la norma que establece que se debe asignar el cargo a la candidatura con mayor número de votos

se refiere a los votos obtenidos por todas las candidaturas, no a la votación total emitida.

En esa lógica, la Actora argumenta que la votación total emitida incluye a los votos nulos, lo cual es inadecuado, pues los votos nulos son manifestaciones de rechazo a las candidaturas postuladas, por lo que solo deben contarse los votos de la ciudadanía que optó por una de las candidaturas postuladas. La Actora también argumenta que son aplicables las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, según las cuales la votación total válida es el resultado de deducir a la votación total emitida los votos nulos.

La Actora ilustra su argumento con diversos recuadros en los que se hace constar la cantidad de votos obtenidos por la candidatura masculina a la que se asignó el cargo en el distrito de Zaragoza y los votos logrados por la candidatura masculina a la que se asignó el cargo en el distrito de Cuauhtémoc. También se ilustran los resultados porcentuales con base en la votación total válida en ambas candidaturas. En ambos supuestos, la candidatura con menor representatividad estaría en el distrito judicial de Zaragoza, por lo que la Actora accedería al cargo al ser la candidata con mayor número de votos en esa demarcación.

Análisis del criterio porcentual para realizar el ajuste de paridad.

De acuerdo con lo anterior, uno de los problemas jurídicos por resolver es determinar si fue conforme a Derecho que el ITE utilizara un parámetro porcentual en vez de un criterio conforme a votos para realizar el ajuste de paridad mediante el desplazamiento de la candidatura de hombre que tuviera el menor porcentaje entre los distritos judiciales de Cuauhtémoc y Zaragoza.

Al respecto, se estima que no le asiste la razón a la Actora por lo siguiente:

De las constituciones federal y local, y de las disposiciones legales aplicables, se desprende la directriz normativa de que las candidaturas electas serán las que obtengan la mayor cantidad de votos y que en la asignación deberá observarse la paridad de género. En el caso, **la**

candidatura se asignó a la candidatura más votada en el distrito judicial de Cuauhtémoc **y a la candidatura más votada** en el distrito judicial de Zaragoza. Las candidaturas electas fueron del género masculino, por lo que, en aplicación del principio de paridad y las reglas derivadas, correspondió desplazar una de las 2 candidaturas masculinas a favor de la **candidatura femenina más votada** en el distrito en el que se hizo el ajuste. La determinación no es contraria a la Constitución ni a la ley, pues armoniza la directriz de otorgar el triunfo a las candidaturas más votadas, con el principio de paridad de género y con el derecho a ser votado y de acceder al cargo, así como con el principio democrático. Esto, al asignarse el cargo judicial a la mujer más votada en el lugar en el que se encontró la candidatura masculina con menor representatividad, con lo que se eligió un juez y una jueza en materia civil.

Además, es conforme a Derecho el parámetro porcentual utilizado para determinar cuál de las dos candidaturas masculinas que inicialmente fueron asignadas por haber obtenido el mayor número de votos debía ser desplazada. Esto, debido a que las condiciones de participación en cada uno de los dos distritos involucrados fueron diversas al conformarse por un número de votantes no equivalente, dada la gran diferencia entre ambas listas nominales. En esas condiciones, el criterio porcentual es un método idóneo para comparar votaciones inicialmente no equivalentes. El criterio porcentual justifica la intervención grave del principio de paridad sobre el derecho a ocupar un cargo de elección popular de la candidatura masculina sobre la que recae el desplazamiento, y sobre el principio democrático en su aspecto de preminencia de la decisión mayoritaria. Esto porque el criterio porcentual permite determinar la representación real de cada candidatura en su distrito, a partir de lo cual se ubica a la candidatura menos representativa, sobre la que recaerá el desplazamiento y se asigna el cargo a la candidatura mujer más votada en la demarcación.

En términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal, artículos 22 fracción II de la Constitución Local y 8 fracción II, de la Ley Electoral Local, la ciudadanía tiene **derecho a ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular,** incluidos los cargos de personas juzgadoras dentro del Poder Judicial.

De igual modo, ya ha quedado establecido que la paridad de género es un principio de rango constitucional que encuentra su cimiento en el mandato de

igualdad y no discriminación por motivos de género, previsto en el párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución, que debe entenderse a partir del reconocimiento de la situación de exclusión sistemática y estructural en la que se ha colocado a las mujeres de manera histórica en todos los ámbitos, incluyendo el político-electoral. Por lo anterior, el principio de paridad de género se reconoce en los artículos 35, fracción II, y 41, fracción I, de la Constitución, pues en esos numerales se establece que **el derecho a ser votada que le asiste a la ciudadanía debe ejercerse en condiciones de paridad,** además de que es una concreción del principio de igualdad y no discriminación por razón de género en el ámbito político-electoral.

Para este asunto es importante recordar que en materia de reforma al Poder Judicial, el artículo 96 de la Constitución Federal, establece que las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, **serán elegidas de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía** el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda; ese numeral, en su fracción IV, dispone que el INE **entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos,** asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. La asignación de los cargos electos se realizará por materia de especialización entre las candidaturas que obtengan el mayor número de votos.

Por su parte, el artículo 116 de la Constitución Federal, expresa que el **poder público de los Estados** se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y **Judicial**; en su fracción III, establece que el Poder Judicial se ejercerá por los Tribunales que establezcan las constituciones respectivas, mismas que contendrán las condiciones para **la elección de las personas juzgadoras por voto directo y secreto de la ciudadanía**. La **elección de las personas juzgadoras de los poderes judiciales locales se realizará conforme a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala esa Constitución para el Poder Judicial de la Federación** en lo que resulte aplicable.

De las anteriores porciones normativas se aprecia que dicha reforma tuvo por objeto que las personas juzgadoras en nuestro país, tanto en el ámbito Federal como en el ámbito Local, fueran elegidas a través del voto libre, secreto y directo, además de que se estableció que se entregaran las

constancias de mayoría a las candidaturas que obtuvieran el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, lo cual también resulta aplicable a nivel local por disposición expresa del artículo 116, fracción III, de la propia Constitución Federal.

De esa reforma Constitucional, destaca que, en el segundo párrafo del artículo octavo transitorio del decreto respectivo, se estableció que las entidades federativas deben realizar adecuaciones a sus constituciones, para que la renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales Locales concluyera en la elección federal ordinaria del año 2027; en cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria del año 2025 o de la elección ordinaria del año 2027.

En armonía con lo anterior, también se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en su artículo 1, numeral 4, entre otras cuestiones, se estableció que la renovación de los Poderes **Judiciales en los Estados se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.**

Por lo que respecta a este asunto, los artículos 494 y 495, numeral 4, disponen que las **personas Magistradas y Juezas de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, serán electas por mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía**, dentro del marco geográfico que al efecto determinen sus Constituciones y Leyes Locales, conforme a las bases y procedimientos que establece la Constitución Federal.

Por su parte, el artículo 504, numeral 1, fracción XV, dispone que corresponde al INE emitir lineamientos de aplicación general para los Organismos Públicos Locales respecto de los procesos de elección de las personas Magistradas y Juezas de los Poderes Judiciales Locales.

En el ámbito Estatal, en virtud de la reforma al Poder Judicial, en el artículo 25 de la Constitución Local, se dispuso que los procesos de elección para renovar a los poderes del Estado se realizarán por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo y de acuerdo con los principios y las bases que prescriben la Constitución Federal y la Constitución Local.

Por ello, en el artículo 84 se estableció que las personas juzgadoras del Poder Judicial **se elegirán de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía**. Ese mismo numeral, en su fracción V, establece que el ITE efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y **entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos,** asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres.

En el ARTÍCULO SEGUNDO transitorio, del Decreto respectivo, se dispuso que, para el caso de las personas juzgadoras del Poder Judicial, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada Distrito Judicial en la elección extraordinaria del año 2025; además de que el ITE podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, entre ellos el de paridad de género. De igual modo se dispuso que el ITE **entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos,** asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer.

Por su parte, como resultado de la reforma al Poder Judicial, el artículo 1 de la Ley Electoral Local establece que las disposiciones de esa Ley tienen por objeto regular la función estatal de **organizar las elecciones para la renovación de los poderes** Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como lo relativo a los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos en el Estado de Tlaxcala. **La renovación de los cargos se llevará a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, bajo los principios de sufragio universal, libre, secreto y directo.**

En este tenor, en el artículo 6 Bis, se dispuso que el ITE **deberá garantizar el principio de paridad de género, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres**; además, el artículo 51, fracción XLV Bis, dispone que el ITE tendrá, entre otras, la atribución de **entregar las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos,** asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres.

Asimismo, el artículo 395 de la Ley en cita dispone que las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado **serán electas por mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía** conforme a las bases, procedimientos, requisitos y periodos que establece la Constitución Local, esa Ley y demás normatividad aplicable. En este orden de ideas, el artículo 396 establece que las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado serán elegidas dentro del marco geográfico que al efecto determine la legislación en la materia, conforme a las bases y procedimientos que establece la Constitución.

Por lo anterior, el artículo 399 establece que la etapa de asignación de cargos **inicia con la identificación por el ITE de las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos y la asignación de estas en cada cargo, en función de su especialización por materia** y alternando entre mujeres y hombres.

Así, el artículo 454 establece que, una vez que el ITE realice la sumatoria final, **procederá a asignar los cargos** por materia de especialización **entre las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos, observando la paridad de género,** y publicará los resultados de la elección. Ahora bien, respecto de la elección de personas juzgadoras, el artículo 422, fracciones II y XIV, establecen que corresponde al ITE aprobar los lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización, desarrollo y cómputo de la elección, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones establecidas en ese artículo y las demás que establezcan las leyes.

Por ello, el 23 de febrero de 2025, el ITE emitió los Criterios de paridad, en los que, en el apartado identificado con la letra "D" denominado "Asignación.", en el Criterio 3, incisos a), c) y d), se estableció que, para la asignación de las Juezas y Jueces cuyo ámbito territorial electivo es distrital, se observará lo siguiente: a) Para cada uno de los juzgados, se ordenarán por materia o especialización sus respectivas candidaturas y por género conforme al número de votos obtenidos en orden descendente, es decir, una lista de mujeres y otra de hombres. **c) Si únicamente existiera una vacante, podrá asignarse inicialmente a la persona con mayor número de votos, independientemente del género.** d) Se realizará una verificación de paridad de género del total de cargos de juezas y jueces asignados inicialmente por ámbito territorial electivo. Si del ejercicio se advirtiera que es mayor el número de jueces en el ámbito territorial electivo, sobre

representándose los hombres, podrán realizarse los ajustes necesarios con la finalidad de garantizar la paridad de género, asignándose la vacante del cargo a la mujer con mayor número de votos en la materia o especialización respectiva. El ajuste deberá comenzar por los hombres con menor número de votos de los cargos de una sola vacante.

Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el ITE aprobó los Lineamientos de asignación, que, en su artículo 12, establecen que, **en los cargos con una sola vacante,** será asignada de manera inicial la persona con mayor número de votos de la lista que corresponda al mismo cargo, materia o especialización y ámbito territorial electivo. Además de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, una vez realizada la asignación inicial, se verificará la paridad de género vertical de conformidad con los Criterios de paridad.

Por ello, en el artículo 15, se expresó que, si de la verificación anterior se advierte que no se cumple la paridad de género vertical, se procederá a realizar los ajustes necesarios, **asignando la vacante del cargo a la mujer con mayor número de votos**, de la elección del mismo cargo, materia o especialización y ámbito territorial electivo **donde se encuentre el hombre con el menor porcentaje de votación emitida en la elección respectiva**.

De las anteriores disposiciones legales, obtenemos las premisas normativas siguientes:

- Por mandato constitucional, las personas juzgadoras que conformen el Poder Judicial del Estado se elegirán a través de voto directo y secreto, en los procesos electorales ordinarios que fijen las leyes; aunque para este asunto es importante precisar que se estableció el desarrollo de un Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025.

- Para llevar a cabo el Proceso Electoral respectivo, el Congreso del Estado debe emitir una convocatoria, en la que se detallen las etapas y demás pormenores de la elección de que se trata.

- El ITE es la autoridad facultada para llevar a cabo la organización y desarrollo de los Procesos Electorales en los que se eligen a las

personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, así como para asignar los cargos respectivos.

- En la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, el ITE está obligado a garantizar el cumplimiento del Principio Constitucional de Paridad de Género, del cual, tanto las Constituciones Federal y Local, como la Ley General Electoral y la Ley Electoral Local, establecen que, en cargos con más de una vacante, se iniciará la asignación con las personas más votadas, alternando entre mujeres y hombres.

- El ITE, en ejercicio de su facultad reglamentaria, para garantizar el cumplimiento del principio Constitucional de Paridad de Género, inicialmente emitió los Criterios de Paridad, en los que, en el apartado identificado con la letra "**D**" denominado "**Asignación**", en el **Criterio 3**, incisos c) y d), estableció que, si únicamente existiera una vacante, podrá asignarse inicialmente a la persona con mayor número de votos, independientemente del género, y que, si se advirtiera que es mayor el número de jueces en el ámbito territorial electivo, sobre representándose los hombres, podrán realizarse los ajustes necesarios con la finalidad de garantizar la paridad de género, asignándose la vacante del cargo a la mujer con mayor número de votos en la materia o especialización respectiva. El ajuste deberá comenzar por los hombres con menor número de votos de los cargos de una sola vacante.

- Con posterioridad, también como parte de su facultad reglamentaria, el ITE expidió los Lineamientos de asignación, mismos que en su artículo 12 establecen que, **en los cargos con una sola vacante,** será asignada de manera inicial la persona con mayor número de votos de la lista que corresponda al mismo cargo, materia o especialización y ámbito territorial electivo.

  Mientras que, en el artículo 14, se estableció que, una vez realizada la asignación inicial, se verificará la paridad de género vertical de conformidad con los Criterios de paridad.

  Por ello, en el artículo 15, se expresó que, si de la verificación anterior se advierte que **no se cumple la paridad de género** vertical, se procederá a realizar los ajustes necesarios, **asignando la vacante del cargo a la mujer con mayor número de votos**, de la elección

del mismo cargo, materia o especialización y ámbito territorial electivo **donde se encuentre el hombre con el menor porcentaje de votación emitida en la elección respectiva**.

En el caso concreto, el procedimiento que se estableció para el desarrollo del Proceso Electoral Local Extraordinario se definió en el artículo segundo transitorio del Decreto 119, emitido por el Congreso del Estado, que, en esencia, estableció lo siguiente:

1. El Proceso Electoral Local Extraordinario inició el día de la entrada en vigor de ese Decreto, que en términos de su artículo primero transitorio ocurrió al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, lo que así sucedió el 10 de diciembre de 2024, por lo que dicho Proceso Electoral inició el 11 de diciembre de 2024.

2. En dicho Proceso Electoral se elegirían la mitad de los cargos de Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial, en el que pudieron participar las personas juzgadoras que se encontraban en funciones –como es el caso de la actora-.

3. El Congreso del Estado debía emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participarían en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, conforme al procedimiento establecido en el artículo 84 de la Constitución Local.

4. Para el caso de las Magistradas y los Magistrados, así como de las Juezas y los Jueces del Poder Judicial, la elección se debe llevar a cabo de forma escalonada, renovando la mitad de los cargos correspondientes a cada Distrito Judicial y la parte restante en la elección ordinaria de 2027; para seleccionar los cargos a renovar en la elección extraordinaria de 2025, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado entregaría al Congreso del Estado un listado con la totalidad de los cargos de personas juzgadoras, indicando su Distrito Judicial, especialización por materia, género, vacantes, renuncias y retiros programados, con lo cual el Congreso del Estado determinaría la porción de cargos a elegir en cada Distrito Judicial, considerando en primer término las vacantes, renuncias y retiros

programados, los cargos restantes se seleccionarían en los términos que se establecieran en la convocatoria.

5. Se facultó al ITE para que emitiera los acuerdos que estimara necesarios para la organización, desarrollo, cómputo y vigilancia del Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, así como para garantizar el cumplimiento de las disposiciones Constitucionales y Legales aplicables, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y **paridad de género**.

6. El ITE efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y **entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos,** asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer. También declarará la validez de la elección correspondiente.

En las condiciones relatadas, el 14 de enero de 2025, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado LA CONVOCATORIA GENERAL PÚBLICA PARA INTEGRAR LOS LISTADOS DE LAS PERSONAS CANDIDATAS, QUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2024-2025, QUE OCUPARÁN LOS CARGOS DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, Y DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Y DE LAS JUEZAS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

En la citada convocatoria, se precisó que entre los cargos cuyas personas juzgadoras titulares se elegirían, se encuentran un Juzgado de lo Civil en el Distrito Judicial de Cuauhtémoc y un Juzgado de lo Civil en el Distrito Judicial de Zaragoza; ahora bien, en el punto identificado con el número romano VII, en el numeral 6, se estableció que la etapa de asignación de cargos inicia con la identificación por el ITE de las candidaturas **que hayan obtenido el mayor número de votos y la asignación de estas en cada cargo, en función de su especialización por materia** y alternando entre mujeres y hombres, y concluye con la entrega de las constancias de mayoría a las candidaturas que resulten ganadoras y la emisión de la declaración de validez respectiva.

En este sentido, el 23 de enero de 2025, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE POSTULACIONES EN LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA 2024-2025 DE LAS PERSONAS JUZGADORAS QUE OCUPARÁN LOS CARGOS DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO DE LAS JUEZAS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

En esa convocatoria nuevamente se precisa que, respecto de los Distritos Judiciales de Cuauhtémoc y Zaragoza, únicamente se elegirán a una persona juzgadora en materia civil para cada Distrito; mientras que en la base segunda se determinó que la etapa de asignación de cargos inicia con la identificación por el ITE de **las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos y la asignación de estos en cada cargo, en función de su especialización por materia** y alternando entre mujeres y hombres, y concluye con la entrega de las constancias de mayoría a las candidaturas que resulten ganadoras y la emisión de la declaración de validez respectiva.

La actora fundamenta su pretensión en el argumento de que las disposiciones constitucionales y legales establecen que la asignación de los cargos electos se realizará por materia de especialización entre las candidaturas que obtengan el mayor número de votos. Sin embargo, la impugnante pierde de vista las peculiaridades del caso concreto, y que el punto específico en el que se centra la controversia es el criterio para realizar el ajuste de paridad mediante el desplazamiento de una candidatura de hombre para asignar el cargo a la candidatura de mujer más votada en el distrito de que se trate.

En efecto, la Actora participó como candidata a jueza en la especialidad civil en el distrito judicial de Zaragoza. En total, en el estado de Tlaxcala se sometieron a votación dos vacantes de personas juzgadoras de la especialidad civil: una en el distrito judicial de Cuauhtémoc y otra en el distrito judicial de Zaragoza, es decir, una sola vacante en cada distrito.

El ITE asignó ambas vacantes unitarias a las candidaturas más votadas, que en ambos casos fueron de hombres. El ITE analizó el cumplimiento del principio de paridad en el ámbito de la especialidad civil, y, al advertir que ambas posiciones fueron inicialmente ocupadas por hombres, se activó la necesidad de implementar una medida para cumplir con el principio de paridad. La medida a implementar consistió en colocar a una candidata en uno de los dos distritos con una sola vacante, para lo cual debía desplazar a uno de los candidatos inicialmente asignados.

El ITE utilizó el criterio de desplazar a la candidatura que tuviera menor porcentaje de votación en ambos distritos. Es aquí donde se encuentra la inconformidad de la Actora, pues, como ya se precisó, desde su perspectiva debió haberse desplazado al candidato con menor número de votos entre las dos demarcaciones.

En la asignación de cargos a las candidaturas con mayor número de votos debe observarse la paridad de género. El ITE en un primer momento asignó los cargos a las personas más votadas como lo exigen las normas constitucionales y legales. Lo que sucedió es que, al analizar la paridad, advirtió que no se cumplía, pues fueron elegidos dos hombres en juzgados de la misma especialidad en dos distritos distintos.

En ese sentido, la cuestión no fue asignar a las candidaturas con mayor número de votos, pues eso ya se había realizado, sino fijar un criterio para desplazar a uno de los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos, partiendo de la presencia de dos candidaturas de hombre inicialmente asignadas en sus distritos.

La medida de desplazamiento de una candidatura de hombre mayormente votada en su distrito exige una justificación proporcional a la intervención en el derecho a ser votado del candidato y al interés democrático de que asuma el cargo la persona más votada en su demarcación. En ese sentido, el procedimiento no transgrede la disposición de que se asigne el cargo a la candidatura con mayor número de votos, pues la norma debe entenderse en el sentido del respeto al principio de paridad de género, el cual en este caso exige que uno de los dos cargos judiciales por especialidad en disputa se otorgue a una mujer.

La medida de ajuste de paridad de una candidatura de hombre debe seguir un parámetro de representatividad, es decir, la medida se justifica en cuanto el desplazamiento se realice en el candidato que tenga la menor representatividad, para lo cual, se puede utilizar la votación obtenida por cada candidatura u otro parámetro que atienda al grado de representatividad, como el porcentual[17].

En el caso en análisis, se presenta la variable relevante de que los distritos de Zaragoza y Cuauhtémoc no son comparables, especialmente porque el número de personas ciudadanas con derecho a voto, es decir, inscritas en el listado nominal de cada demarcación, no es equivalente dada la diferencia considerable entre ambos distritos. En ese sentido, la problemática consiste en determinar el parámetro que mejor justifique el ajuste de paridad: el número de votos o el porcentaje de votación.

En términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 2 y 3, de la Constitución Federal, así como en el diverso 32, numeral 2, inciso b) de la Ley General Electoral, para los Procesos Electorales Federales y Locales, corresponde al INE definir la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los Distritos Electorales y división del territorio en secciones electorales, además de la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras, además del padrón y la lista de electores.

En este sentido, en términos de la tesis LXXIX, de rubro **GEOGRAFÍA ELECTORAL. CONCEPTO Y PROPÓSITOS[18],** se estableció el criterio de

[17] La representatividad para efectos del presente análisis se refiere a la fuerza político – electoral mostrada por una candidatura en las condiciones específicas en las que contendió.

[18] Tesis LXXIX/2002, **GEOGRAFÍA ELECTORAL. CONCEPTO Y PROPÓSITOS.** Por geografía electoral se entiende la delimitación del ámbito territorial para el registro y distribución de los ciudadanos que habrán de participar en unas elecciones, de tal forma que para las elecciones federales, en los artículos 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 11, párrafo 1; y 82, párrafo 1, inciso j), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece la división del territorio nacional en trescientos distritos electorales federales uninominales. La delimitación de cada uno de estos distritos cumple con cuatro propósitos, que son los siguientes: **a) Se busca que cada voto emitido tenga el mismo valor, por servir siempre para elegir un número similar de representantes**; b) Se pretende evitar que en la delimitación de los distritos prevalezcan motivos políticos que beneficien a un partido en especial; c) Facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio, de tal forma que les sea asequible el traslado al lugar donde habrán de sufragar y la autoridad no encuentre dificultades para recibir los expedientes de casilla y realizar los cómputos respectivos, y d) La homogeneidad de la población, con lo cual se busca preservar, en la medida de lo posible, la división geográfica preestablecida de barrios, colonias, delegaciones, municipios y la integridad de comunidades rurales e indígenas. Por otro lado, la distribución geográfica se sustenta en estudios y actividades que tienen un alto grado de complejidad técnica y la utilización de diversas disciplinas, como son, entre otras, las de carácter electoral, demográfico, estadístico, de vialidad, topográficos, para contar con estudios sobre vías de comunicación, infraestructura urbana, tiempos de traslado, accidentes geográficos, aspectos étnicos y sociológicos, por citar algunos ejemplos. Finalmente, la delimitación de la geografía electoral implica la realización de diversas actividades técnicas, multidisciplinarias, a través de una metodología y planeación

que la delimitación de los distritos electorales, entre otros, **cumple con el propósito de buscar que cada voto emitido tenga el mismo valor**, al servir siempre para elegir un número similar de representantes, además de facilitar a la ciudadanía la emisión del sufragio, de tal forma que les sea asequible el traslado al lugar donde habrán de sufragar y que la autoridad no encuentre dificultades para recibir los expedientes de casilla y realizar los cómputos respectivos, así como la homogeneidad de la población, con lo cual se busca preservar**, en la medida de lo posible**, la división geográfica preestablecida de barrios, colonias, delegaciones, municipios y la integridad de comunidades rurales e indígenas.

En este sentido, la naturaleza y necesidad de la geografía electoral radican, esencialmente, en la procuración de que **cada voto emitido tenga el mismo valor.**

Así, desde el artículo 53, párrafo primero, de la Constitución Federal, se establece el criterio para conformar los Distritos Electorales Federales, que es el siguiente: la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados o diputadas de mayoría.

En este sentido, esas reglas de distribución de la Geografía Electoral no les podían ser aplicadas a las elecciones de las personas juzgadoras, entre otros, de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, entre ellas Tlaxcala, en virtud de que la conformación de un Distrito Electoral, sea Local o Federal, no coincide en cuanto a su dimensión poblacional y territorial, así como su distribución geográfica, respecto de los Distritos Judiciales, cuyas personas titulares se elegirían en este Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025.

determinada que tendrá como resultado que los distritos electorales se constituyan en ámbitos territoriales con elementos que tienden a reflejar una cierta unidad, con rasgos y características similares que se ven reflejados precisamente en el hecho de que el número de ciudadanos, ubicados en un mismo distrito electoral y que participan en un determinado proceso electoral, sea muy parecido, atendiendo a vialidades, medios de comunicación, aspectos socioculturales, accidentes geográficos, densidad poblacional, movilidad demográfica, entre otros, por lo que el referente para establecer el porcentaje de participación en la votación, que pudo haberse presentado en una determinada casilla, es precisamente el que se haya dado en el distrito electoral respectivo.

Muestra de ello es que el artículo 84 de la Constitución Local establece que las personas juzgadoras serán elegidas por especialización por materia del Órgano Jurisdiccional para el que se postulen las candidaturas; en este asunto, se debe considerar la especialización en materia civil de los Distritos Judiciales de Cuauhtémoc y Zaragoza.

Lo anterior, tal como se advierte del contenido del acuerdo INE/CG52/2025, del Instituto Nacional Electoral por el que se emitieron las directrices generales para la organización de los procesos electorales de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas en el proceso electoral extraordinario de 2025. En el considerando CUARTO, numeral 5, del acuerdo, se dispuso que, para la determinación del marco geográfico electoral que se utilizaría para las elecciones de los Poderes Judiciales Locales, se solicitaría a los Organismos Públicos Locales **la geografía judicial** y **los cargos a elegir.** Posterior a ello, se realizaría un análisis para armonizar la Geografía Judicial con el marco geográfico electoral, en el ámbito local, para, finalmente, elaborar el marco geográfico electoral para las elecciones de los Poderes Judiciales Locales.

En este sentido, en el acuerdo INE/CG220/2025, se aprobó el Marco Geográfico Electoral para el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala 2024-2025, en el que se precisó que se realizó la solicitud al ITE para que se le enviara la información de su Geografía Judicial, y se procedió a la elaboración de productos cartográficos que concluyó con la validación del propio ITE, de la información que le fue presentada[19].

Además, se dijo que es importante mencionar que el criterio principal que se siguió en su trabajo fue armonizar la información de la Geografía Judicial Local enviada por el ITE e incluida en la legislación local en el Marco Geográfico Electoral. Durante el análisis realizado de las demarcaciones que conforman la geografía judicial local, las cuales reciben diversos nombres conforme a la legislación local, **se identificó que están conformadas por agrupaciones de municipios completos, lo que facilita su armonización con el Marco Geográfico Electoral vigente, ya que en este se incluye el nivel municipal**[20].

[19] Léase penúltimo párrafo de la página 20 del citado acuerdo.

[20] Léase el último párrafo de la página 20 de dicho acuerdo.

Asimismo, en la página 22 de dicho acuerdo, se precisó que, una vez revisada la información aludida, se identificó que, con base en la matriz enviada por el ITE, la demarcación de la entidad se subdivide en unidades geográficas integradas a partir de la agrupación de municipios completos, por lo que la armonización de la geografía judicial de la entidad con el Marco Geográfico Electoral vigente no representa problemática alguna, ya que este último contempla el ámbito territorial de municipio.

Por lo anterior, se elaboraron los mapas del Marco Geográfico Electoral para el Proceso Electoral Local Extraordinario en Tlaxcala, en los que los Distritos Judiciales Locales se integraron por municipios completos.

Como es de verse, al realizarse la delimitación de la Geografía Electoral, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, para la elección de personas juzgadoras en el Estado de Tlaxcala, se siguió la conformación de los actuales Distritos Judiciales, armonizados con la Geografía Electoral vigente, tomando como base la integración por municipios, sin que hubiera sido posible observar el criterio de **equilibrio poblacional**, que permitiera buscar una **distribución equitativa** de la población dentro de cada unidad del Marco Geográfico Electoral.

Ahora bien, para el asunto que nos ocupa, resulta de vital importancia precisar que, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracciones II y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en materia civil, familiar y mercantil, el territorio del Estado se dividirá en los Distritos Judiciales siguientes:

CUAUHTÉMOC, con sede en el recinto denominado "Ciudad Judicial" ubicado en la comunidad de Santa Anita Huiloac del Municipio de Apizaco, que comprenderá los Municipios de: Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apizaco, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Cuaxomulco, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, La Magdalena Tlaltelulco, Panotla, San Francisco Tetlanohcan, San José Teacalco, San Lucas Tecopilco, Santa Ana Nopalucan, Santa Cruz Tlaxcala, Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, Tocatlán, Totolac, Tzompantépec, Xaloztoc, Xaltocan y Yauhquemehcan.

ZARAGOZA, con sede en la Ciudad de Zacatelco, que comprenderá los municipios de: Zacatelco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Nativitas, Teolocholco, Tepeyanco, Tetlatlahuca, Xicohtzinco, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quilehtla, San Juan Huactzinco, Santa Catarina Ayometla, Santa Isabel Xiloxoxtla, San Damián Texóloc, San Jerónimo Zacualpan y San Lorenzo Axocomanitla.

De lo anterior, se puede apreciar que el Distrito Judicial de Cuauhtémoc se conforma por 22 municipios; por su parte, el Distrito Judicial de Zaragoza, únicamente se conforma por 15 municipios, lo que en principio anuncia una probable desproporción entre el número de personas de la lista nominal que integran ambos distritos.

En este punto debe precisarse que el INE utilizó como parámetro de equivalencia entre distritos en la elección del Poder Judicial de la Federación, el número de personas electoras en cada demarcación[21]. El INE es la autoridad que tiene a su cargo a nivel federal y local, la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales en términos del artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 2, de la Constitución Federal. Por tanto, el criterio de equilibrio poblacional conforme al número de personas electoras es un referente adecuado para resolver la problemática del caso en análisis, específicamente, las personas ciudadanas inscritas en la lista nominal, que son quienes tuvieron derecho a votar en la pasada jornada electoral del 1 de junio.

En esa lógica, a requerimiento de este Tribunal, el ITE informó la cantidad de personas electoras que se encuentran en las listas nominales en cada Distrito Judicial, de acuerdo con los municipios que los integran y que sirvieron de base en este Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, para la elección de personas juzgadoras. De la lista nominal se desprende que en el Distrito Judicial de Cuauhtémoc se encuentran inscritas 491,382 (cuatrocientas noventa y un mil trescientas ochenta y dos) personas electoras, mientras que, en el Distrito Judicial de Zaragoza, en la lista nominal, se encuentran inscritas sólo 156,859 (ciento cincuenta y seis mil ochocientas cincuenta y nueve) personas electoras.

[21] El *Acuerdo INE/CG62/2025* del Consejo General del INE explica y precisa la utilización del parámetro descrito.

En esa tesitura, si a la cantidad de personas electoras inscritas en la lista nominal de los municipios que integran el Distrito Judicial de Cuauhtémoc, le restamos la cantidad de personas electoras inscritas en la lista nominal de los municipios que integran el Distrito Judicial de Zaragoza, obtenemos que entre ambos Distritos Judiciales existe una diferencia de 334,523 (trescientos treinta y cuatro mil quinientos veintitrés) personas electoras.

Así, si comparamos proporcionalmente la cantidad de personas electoras en la lista nominal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc con la cantidad de personas electoras en la lista nominal del Distrito Judicial de Zaragoza, obtenemos que las personas electoras en la lista nominal del Distrito Judicial de Zaragoza equivalen a sólo el 31.92 % de la cantidad de personas electoras en la lista nominal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Personas electoras en los municipios que integran el Distrito Judicial de Cuauhtémoc. A	Personas electoras en los municipios que integran el Distrito Judicial de Zaragoza B	Porcentaje al que equivalen las personas electoras del Distrito Judicial de Zaragoza, respecto de las personas electoras del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. (B X 100/A)
491,382	156,859	31.92 %

De esta forma, si se considera que el total de personas electoras inscritas en la lista nominal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc es el 100 %, si se divide entre el 31.92 % al que equivalen las personas electoras de la lista nominal del Distrito Judicial de Zaragoza, se obtiene que un voto emitido en el Distrito Judicial de Zaragoza equivale a 3.1 votos emitidos en el Distrito Judicial de Cuauhtémoc, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Porcentaje total de personas electoras del Distrito Judicial de Cuauhtémoc A	Porcentaje al que equivalen las personas electoras del Distrito Judicial de Zaragoza, respecto del Distrito Judicial de Cuauhtémoc B	Número de votos a que equivale un voto emitido en el Distrito Judicial de Zaragoza, respecto del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (A/B)
100 %	31.92 %	3.1 votos

El criterio de equilibrio poblacional es una de las variables de relevancia que nuestro sistema electoral ha considerado en la conformación de los distritos electorales. El criterio de equilibrio poblacional fue retomado por el INE para la elección judicial.

En efecto, el INE en el acuerdo INE/CG2362/2024[22] determinó que en el ámbito federal, entre otros, se eligen a las personas juzgadoras por Circuito Judicial o por Circunscripción Plurinominal y por ello se generó la necesidad de definir el Marco Geográfico Electoral, a fin de poder determinar el ámbito territorial en el que se distribuirá a la ciudadanía para su participación en las elecciones extraordinarias del domingo 1 de junio de 2025, buscando en todo momento que la ciudadanía vote en igualdad de circunstancias entre todo el electorado, con la finalidad de garantizar sus derechos fundamentales.

En este sentido, en el punto de acuerdo PRIMERO, inciso b), estableció que el Marco Geográfico Electoral se definirá a partir de los Circuitos Judiciales en que se divida el territorio nacional, según los acuerdos del Poder Judicial de la Federación; en el inciso d), fracción II, se estableció que la geografía electoral ya existente (secciones electorales, distritos electorales, circunscripciones electorales) constituye la unidad de referencia para la subdivisión de esos Distritos Judiciales, para ello, entre otros, se utiliza el criterio de **equilibrio poblacional**, que busca garantizar una **distribución equitativa** de la población dentro de cada unidad del Marco Geográfico Electoral para el Proceso Electoral Extraordinario.

En relación con lo anterior, el INE emitió el acuerdo INE/CG62/2025, por el que se ajusta el marco geográfico electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del poder judicial de la federación 2024-2025, aprobado mediante el acuerdo INE/CG2362/2024; asimismo, se declara su definitividad.

En dicho acuerdo, en virtud de que las elecciones de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación se verifican en Circuitos Judiciales, en la página 31, **el INE razonó que se estimó necesario admitir un margen de variación en el número de personas electoras de cada conglomerado, permitiendo una tolerancia dentro de un rango de más menos 20 % respecto de la media de personas electoras por circuito judicial. Este margen de variación se justifica en la necesidad de procurar un equilibrio práctico y operativo en la distribución geográfica de las personas electoras, preservando la representatividad y accesibilidad.**

[22] Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se Aprueba el Marco Geográfico Electoral que se Utilizará en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, referente a la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

De esta manera, la homologación en la cantidad de personas electoras de cada conglomerado, respetando la tolerancia mencionada, asegura una representación ciudadana adecuada, que refleja tanto la proporcionalidad como la equidad del voto.

En el tono del presente análisis, el margen de tolerancia fijado por el INE del más menos veinte por ciento sobre la media aritmética de personas electoras en el distrito judicial, es un referente adecuado para el análisis del presente caso. Esto, ya que el INE es la autoridad competente para determinar la distritación a nivel federal y local, y el parámetro se fijó para elecciones judiciales.

En el presente asunto, la media resulta de las operaciones siguientes[23].

A. Lista nominal distrito Cuauhtémoc	**B.** Lista nominal distrito Zaragoza	**C.** Media aritmética	**D.** 20 % de la media
491,382	156,859	324,121 **(A+B/2=C)**	64,824

Sobre la base de las cantidades descritas, las personas inscritas en las listas nominales de cada distrito no deberían superar la cantidad resultante de sumar a la media, el 20% calculado. Tampoco deberían estar por debajo del resultado de restar a la media aritmética, el 20% calculado.

E. Límite superior 388,945 **(C+D)**	Lista nominal distrito Cuauhtémoc 491,382	
F. Límite inferior 259,297 **(C - D)**		Lista nominal distrito Zaragoza 156,859
Cantidad numérica y porcentual sobre la media	167,261 **(A – E)** (+) 51.60 %	
Cantidad numérica y porcentual debajo de la media		167,262 **(C – B)** (-) 51.60%

[23] La medio o promedio es una medida de tendencia central que se obtiene sumando los datos involucrados y dividiéndolos entre el número de datos que se sumaron.

De la inserción se desprende que el distrito judicial de Cuauhtémoc se encuentra 51.69 % por encima de la media. El distrito judicial de Zaragoza está 51.69 % por debajo de la media. Por lo tanto, los distritos en comparación no pueden considerarse equivalentes al estar muy por encima del parámetro objetivo adoptado.

En el caso que se analiza, el INE determinó no considerar el criterio de equilibrio poblacional para establecer los distritos judiciales en Tlaxcala, privilegiando que las demarcaciones de referencia abarquen municipios completos. La decisión del INE se da en el contexto de una elección inédita en la que confluyen diversos factores que se deben ajustar y que no siempre permiten armonizar los derechos, principios e intereses en juego.

La distritación judicial en Tlaxcala no es objeto de reclamo en el presente juicio, pero el hecho de que en su conformación no se haya adoptado el criterio de equilibrio poblacional, no impide que las distorsiones que esa decisión provocó sean atenuadas o reparadas con medidas posteriores. En ese sentido, las determinaciones de las autoridades electorales con ese objetivo son positivas y confluyen en fortalecer la integridad de las elecciones.

Lo expuesto permite concluir que los distritos judiciales de Zaragoza y Cuauhtémoc no son comparables, pues la diferencia en la cantidad de votos que estuvieron en disputa es muy amplia, incluso por encima del margen de tolerancia fijado por el INE para las elecciones judiciales federales.

Las candidaturas que participaron en el distrito de Zacatelco disputaron un universo de votos desproporcionadamente menor que las candidaturas postuladas en el distrito de Cuauhtémoc, lo que se ve reflejado en el número de votos de las candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos y, desde luego, en las restantes.

En ese sentido, la representatividad de la candidatura de hombre más votada en Zacatelco no se puede comparar con la candidatura de hombre más votada de Cuauhtémoc, por medio del número de votos de cada candidatura, por lo que fue necesario fijar un criterio que hiciera comparables esas cantidades: el criterio de comparación con base en porcentajes. El parámetro porcentual fijado por el ITE en el Acuerdo impugnado permite calcular la

representatividad de las candidaturas en cada distrito, es decir, en sus propias condiciones de competencia. Los porcentajes así obtenidos en cada distrito se comparan para determinar al candidato con menor representatividad. Además, es un criterio obtenido en base a votos: los votos de los candidatos involucrados respecto de la votación total emitida, lo cual es consistente con la Constitución y con la ley.

La asignación de las candidaturas más votadas en cada distrito en los que estuvo en disputa una sola vacante de la misma especialidad debe interpretarse en armonía con el principio de paridad de género. El principio de paridad de género exigió en la situación específica que, al ser hombres las dos candidaturas más votadas, debía desplazarse a alguno para asignarle el puesto a una mujer.

En ese orden de ideas, el desplazamiento de la candidatura más votada constituye una intervención grave en el derecho de la persona que originalmente obtuvo el cargo, y en el principio democrático en su aspecto de prevalencia de la decisión de la mayoría. Por tanto, el ajuste por motivos de paridad debe estar plenamente justificado.

El criterio numérico de votos no es un parámetro que, en las condiciones del caso concreto, justifique el sacrificio del derecho a acceder al cargo de uno de los candidatos, ni del principio democrático en la vertiente de que se trata, pues el número de votos no refleja la representatividad real de cada candidatura en su distrito, y supondría validar una ventaja estructural no controlable por las candidaturas, pero subsanable mediante el criterio porcentual.

Una vez determinada la candidatura masculina sobre la que debe hacerse el ajuste, el cargo se asigna a la mujer más votada en el distrito, con lo que se cumple con la regla de que los puestos judiciales deben asignarse entre las candidaturas más votadas.

En esas condiciones, la determinación no es contraria a la Constitución ni a la ley, pues armoniza la directriz de otorgar el triunfo a las candidaturas más votadas, con el principio de paridad de género y con el derecho a ser votado y de acceder al cargo, así como con el principio democrático. Esto, al asignarse el cargo judicial a la mujer más votada en el lugar en el que se

encontró la candidatura masculina con menor representatividad, con lo cual se eligió un juez y una jueza en materia civil.

Estudio del criterio porcentual obtenido sobre la base de la votación total emitida.

De la causa de pedir del escrito del medio de impugnación se desprende el siguiente planteamiento de la Actora.

- El ITE utilizó indebidamente la votación total emitida para calcular el porcentaje de cada una de las candidaturas de hombre inicialmente asignadas en cada distrito, pues debió utilizar la votación total válida al tratarse de la conformada por las personas que sufragaron por alguna de las opciones postuladas y porque es la votación que se utiliza en el sistema jurídico electoral.

La lectura atenta de la demanda permite advertir que la Actora no solo impugna que el ITE hubiera utilizado el parámetro porcentual en lugar del número de votos para determinar la candidatura masculina que soportaría el ajuste de paridad, sino que también se desprende el planteamiento de que el criterio porcentual debió calcularse con base en la votación total válida en lugar de la votación total emitida.

El planteamiento se sustenta en que la norma que establece que se debe asignar el cargo a la candidatura con mayor número de votos se refiere a los votos válidos, no a la votación total emitida que incluye los votos nulos.

En esa lógica, la Actora argumenta que la votación total emitida incluye a los votos nulos, lo cual es inadecuado, pues los votos nulos son manifestaciones de rechazo a las candidaturas postuladas, por lo que solo deben considerarse los votos de la ciudadanía que optó por alguna de las candidaturas postuladas. La Actora también argumenta que son aplicables las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, según las cuales la votación total válida es el resultado de deducir a la votación total emitida los votos nulos.

La Actora ilustra su argumento con diversos recuadros en los que se hace constar los resultados porcentuales con base en la votación total válida en ambas candidaturas, conforme a los cuales, la candidatura con menor representatividad estaría en el distrito judicial de Zaragoza, por lo que la Actora accedería al cargo al ser la candidata con mayor número de votos en esa demarcación.

Este Tribunal estima que no le asiste la razón a la Actora por lo siguiente:

- El porcentaje calculado sobre la votación total emitida proporciona resultados más cercanos a la representatividad real que el basado en la votación válida. El desplazamiento de una candidatura entre dos posibilidades que inicialmente obtuvieron la mayor cantidad de votos en su distrito debe justificarse con razones sólidas, pues incide en el derecho humano a ser votado de una persona candidata que obtuvo la mayoría de los votos en una de las demarcaciones, así como en el principio democrático en el aspecto de que las personas electas popularmente sean las más votadas. La representatividad real de cada una de las candidaturas en el caso que se resuelve no se puede obtener a partir del número de votos de cada una de las candidaturas de hombre, sino a partir de las condiciones en que participaron; destacadamente, a partir del número de votos que estuvieron en disputa en cada distrito. La votación total emitida se compone de un número mayor de votantes en la demarcación que en el caso de la votación total válida, es decir, la votación total emitida es un conjunto más próximo al número total de personas con derecho a voto en la demarcación, parámetro con base en el cual es posible calcular de mejor forma el valor de cada voto en relación con el otro distrito a comparar y, por tanto, la representatividad real de cada candidatura en su distrito a partir del número de votos que obtuvo cada una. En ese sentido, no es pertinente en este caso descartar los votos nulos, pues no se trata de un diseño para asignar escaños por representación proporcional, sino de obtener la representación real de cada candidatura de hombre para justificar el desplazamiento.

- El método utilizado por el ITE es sustancialmente consistente con la Constitución y con la ley, por lo que las disposiciones reglamentarias contenidas en los Criterios de paridad y en los Lineamientos de asignación deben entenderse en el sentido de que, en los casos

> donde deba realizarse un desplazamiento de candidaturas de hombres pertenecen a distritos no comparables por sus diferencias en el número de personas registradas en la lista nominal, el ajuste debe realizarse sobre el candidato con menor representatividad calculada mediante la obtención del porcentaje de votación obtenido a partir de la votación total emitida.

El criterio o parámetro porcentual para determinar la candidatura de hombre sobre la que debe hacerse el ajuste de paridad en casos como el que se analiza es adecuado.

El planteamiento de la Actora incide sobre la base de votación con la que debe hacerse el cálculo porcentual. De tal manera que el problema jurídico por resolver consiste en determinar si fue conforme a Derecho que el ITE calculara el porcentaje para realizar el ajuste de paridad con base en la votación total emitida en vez de la votación total válida.

Ha quedado establecido que los actos de autoridad tienen presunción de constitucionalidad y legalidad, por lo que corresponde a quienes pretenden su modificación o invalidez aportar razones y pruebas que derroten esa presunción.

En el caso, el ITE fundó su decisión de utilizar el criterio porcentual con base en la votación total emitida, en la interpretación del inciso d) del criterio 3 de los Criterios de paridad y en los artículos 3, fracción XXVII, 14 y 15 de los Lineamientos de asignación, bajo la directriz del deber de salvaguardar la igualdad del voto y solventar las distorsiones producidas por la diferencia desproporcionada entre el número de personas inscritas en la lista nominal de los dos distritos a comparar.

La justificación de la decisión pasa por encuadrar debidamente las particularidades relevantes del asunto.

En los distritos judiciales de Zaragoza y Cuauhtémoc se sometió a elección la titularidad de un juzgado de la especialidad civil. Las personas candidatas compitieron por una sola vacante en cada distrito, por lo que el cargo se

asignó inicialmente a la candidatura más votada en cada demarcación. Las candidaturas con mayor número de votos fueron para hombres, por lo que, de acuerdo con el principio de paridad, debía desplazarse una de las candidaturas masculinas a favor de la candidatura mujer más votada en el distrito. El ITE, con base en un parámetro porcentual calculado sobre la base de la votación total emitida, realizó el ajuste en el distrito de Cuauhtémoc, porque el candidato inicialmente asignado, tuvo un porcentaje menor que el candidato de Zaragoza.

El diseño de la elección de que se trata se rige por el principio de mayoría relativa, pues la candidatura hombre o mujer a la que se asigna el cargo es la que obtiene el mayor número de votos de entre las candidaturas postuladas. Los distritos judiciales de Zaragoza y Cuauhtémoc no son comparables para efectos de la solución del presente asunto, destacadamente porque el número de personas inscritas en la lista nominal es desproporcionado.

La decisión sobre el candidato del distrito en que debe recaer el ajuste de paridad supone comparar la representatividad de dos candidaturas pertenecientes a dos distritos no comparables dadas las diferencias desproporcionadas en el número de votos en disputa o personas con derecho a voto por estar inscritas en la lista nominal.

El caso se diferencia sustancialmente de los modelos que ordinariamente se han conformado en el sistema de partidos políticos y candidaturas independientes en nuestro país, en los que los distritos se forman de acuerdo con el criterio de equilibrio poblacional. El criterio de equilibrio poblacional se aplica con el fin de que los votos en una demarcación tengan el mismo valor para elegir a las representaciones populares. Sobre esa base, es comparable el número de votos de las candidaturas en un distrito respecto de los otros. En ese contexto, el número de votos por sí mismo refleja la representatividad de las candidaturas, pues se emiten en demarcaciones formadas de acuerdo con un número equivalente de personas.

En ese orden de ideas, las candidaturas postuladas en un distrito compiten por los votos de las personas registradas en la lista nominal de su demarcación. La representatividad de cada candidatura se expresa en el número de votos obtenidos sin importar los votos de las otras candidaturas, ni los votos nulos, ni los de las personas que estando en la lista nominal no

acudieron a votar, ni alguna otra modalidad. Así, la cantidad de votos obtenidos por cada una de las candidaturas postuladas expresa su representatividad para efectos de determinar la que obtuvo la mayoría de los votos, sin que sea relevante convertir las votaciones a porcentajes.

***n* número de personas inscritas en la lista nominal**	
Candidatura A **Candidatura B** **Candidatura C** **Candidatura D** **Votos nulos**	Candidatura C > candidaturas A, B y D. La candidatura C es la más representativa por tener el mayor número de votos. Es la candidatura que obtuvo la mayor cantidad de los votos en disputa a su favor.

Así, en el supuesto de que los distritos a comparar en el presente caso fueran equivalentes, es decir, con un número similar de personas con derecho a voto, el número de votos obtenidos por cada candidatura a comparar en cada distrito bastaría para expresar la representatividad de cada persona postulada, con independencia del número de votos a favor de las otras candidaturas, de los votos nulos y de las personas que no acudieron a votar, pues lo relevante es que las candidaturas obtuvieron su votación de un universo equivalente de votos en disputa. En tales circunstancias, no habría de duda de qué candidatura sería desplazada por ser la menos representativa.

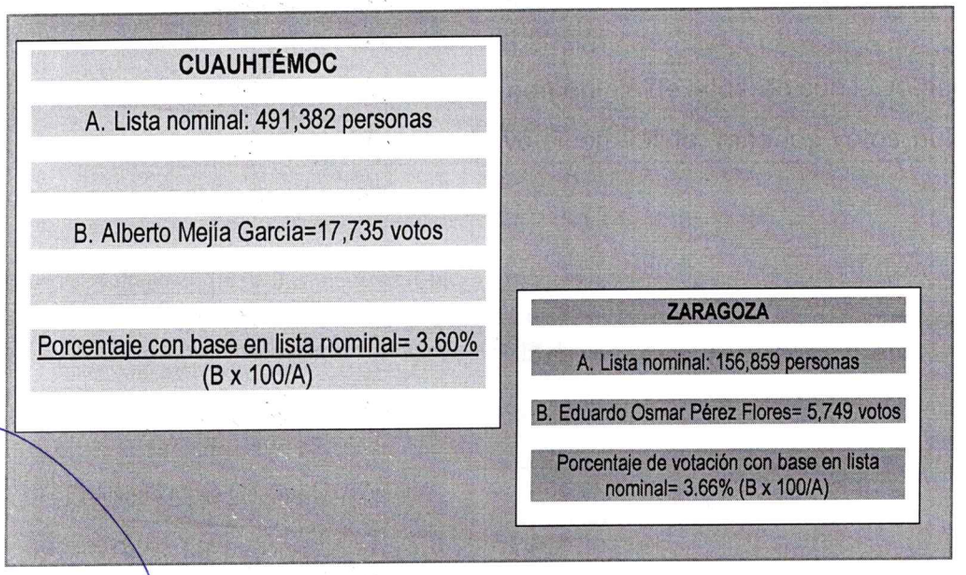
CUAUHTÉMOC[24] Alberto Mejía García=17,735 votos	JUÁREZ
MORELOS	OCAMPO
XICOHTÉNCATL	ZARAGOZA Eduardo Osmar Pérez Flores=5,749 votos

En el caso, los distritos judiciales no son comparables por no tener un número equivalente de personas con derecho a voto entre ellos, por lo que los votos obtenidos por las candidaturas a comparar deben convertirse a

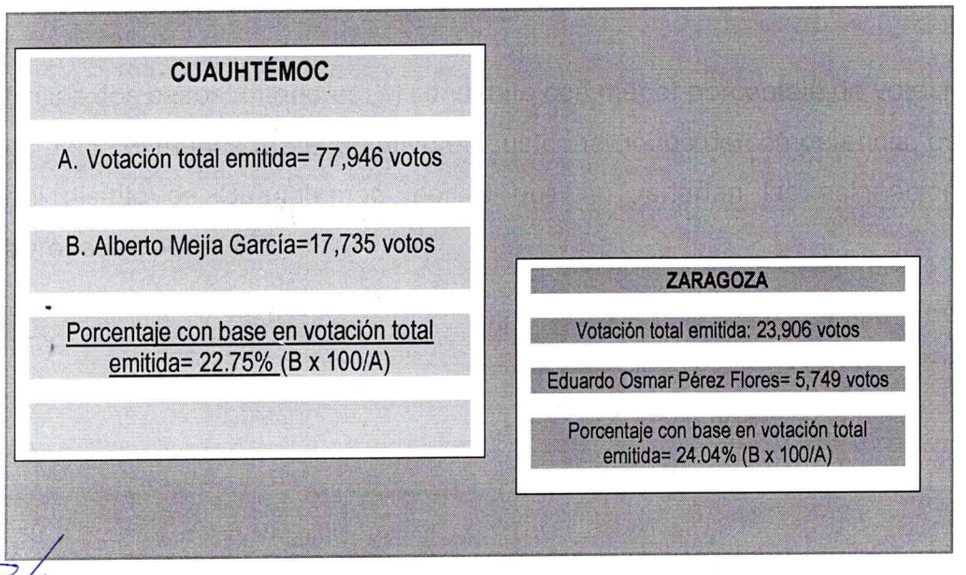
[24] El artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala establece los distritos judiciales en materia civil, familiar y mercantil en que se divide el Estado.

porcentaje. El porcentaje obtenido debe calcularse sobre la votación lograda por la candidatura, sin considerar los votos de las otras candidaturas, los votos nulos ni las personas con derecho a voto que no acudieron a emitir su sufragio, pero, sobre la base del universo de votos en disputa, es decir, del número de personas registradas en la lista nominal.

El procedimiento traería los siguientes porcentajes de votación de los candidatos a comparar:



En el caso, el ITE determinó calcular el porcentaje de acuerdo con la votación total emitida, es decir, la suma de la votación válida, más los votos nulos, con los siguientes resultados:



En los dos casos anteriores, el candidato con menor porcentaje de votación, es decir, el menos representativo en sus condiciones de competencia, es el del distrito de Cuauhtémoc, por lo que no variarían las asignaciones aprobadas por el ITE.

Al respecto, es importante precisar algunos puntos relacionados con las implicaciones del cálculo del porcentaje de votación con base en diversos referentes o parámetros.

El parámetro adecuado para medir la equivalencia entre diversos distritos es el número de personas con derecho a votar en cada demarcación, es decir, personas inscritas en la lista nominal. En ese sentido, el referente óptimo para medir la representatividad de candidaturas que contendieron en distritos no equivalentes es el número de personas electoras inscritas en la lista nominal, pues es un parámetro objetivo utilizado por el INE para medir el equilibrio poblacional de los distritos judiciales.

Por lo tanto, el resultado más cercano a la representatividad real de una candidatura en las condiciones del caso en análisis es el obtenido a partir de la votación de la candidatura que se quiera medir con base en el número de personas inscritas en la lista nominal, tal y como se ilustra en uno de los recuadros insertados con antelación.

El número de personas con derecho a votar en el distrito electoral se puede subdividir en diversos conjuntos de acuerdo con los resultados de las votaciones. En el contexto del asunto que se analiza se pueden desprender los subconjuntos siguientes:

> El número de personas en lista nominal se puede subdividir en los siguientes subconjuntos:
>
> 1. Votación válida consistente en la totalidad de los votos a favor de las candidaturas participantes en la elección judicial.
>
> 2. Votación nula que es la suma de los votos de las personas que acudieron a las urnas y no expresaron su sufragio a favor de alguna de las opciones postuladas.
>
> 3. Número de personas inscritas en la lista nominal, pero que no acudieron a votar.
>
> Los 3 subconjuntos sumados dan como resultado el número óptimo para calcular la representatividad, es decir, el número de personas inscritas en la lista nominal.

La Actora propone que se utilice la votación válida emitida, es decir, un solo subconjunto equivalente a 57,134 (cincuenta y siete mil ciento treinta y cuatro) votos en el distrito de Cuauhtémoc, y 18,541 (dieciocho mil quinientos cuarenta y uno) votos en el distrito de Zaragoza.

El ITE utilizó la votación total emitida, es decir, la suma de dos subconjuntos: la votación válida más la votación nula, que resulta en 77,946 (setenta y siete mil novecientos cuarenta y seis) votos en el distrito de Cuauhtémoc, y 23,906 (veintitrés mil novecientos seis) votos en el distrito de Zaragoza.

Es evidente que el parámetro utilizado por el ITE se acerca más al referente óptimo para calcular la representatividad de una candidatura en un distrito para compararla con otra candidatura de otro distrito con el que no tiene equivalencia. Por lo tanto, el criterio del ITE utiliza una base más representativa que la propuesta por la Actora.

Lo anterior es consistente con los resultados de los porcentajes obtenidos sobre la base de cada uno de los parámetros. Así, al utilizar la votación válida emitida, el porcentaje de la candidatura masculina del distrito de Zaragoza quedaría por debajo de la candidatura masculina de Cuauhtémoc por 4 centésimas. El porcentaje de votación calculado sobre la base de la votación total emitida produce que el porcentaje de la candidatura de hombre en el distrito de Cuauhtémoc quede por debajo del candidato del distrito de Zaragoza, lo mismo que al utilizar como base el número de personas inscritas en la lista nominal. Esto, como se ilustra en la siguiente inserción:

Distrito judicial electoral	Candidato	Votación válida emitida	Votación total emitida	Lista nominal
Cuauhtémoc	Alberto Mejía García	31.04%	22.75%	3.60%
Zaragoza	Eduardo Osmar Pérez Flores	31.00%	24.04%	3.66%

En las condiciones relatadas, el parámetro utilizado por el ITE para calcular el porcentaje de votación arroja resultados más representativos que la votación válida propuesta por la Actora, pues utiliza valores más cercanos al número total de votos en la lista nominal, referente óptimo para calcular la representatividad real de cada candidatura a comparar.

Una vez sentado lo anterior, se atienden el resto de los planteamientos de la Actora para sostener su postura.

La Actora plantea que la votación válida emitida es la que debió utilizarse para calcular el porcentaje de cada candidato, pues no todos los votos tienen

el mismo impacto, ya que los votos nulos son manifestaciones de rechazo a las candidaturas postuladas, por lo que solo deben contarse los votos de la ciudadanía que optó por una de las candidaturas postuladas.

Al respecto, ha quedado demostrado que, en las condiciones del caso concreto, para medir la representatividad de una candidatura en un distrito, no son relevantes los votos válidos, ni los votos nulos, ni el número de personas que no acudieron a votar, sino el universo de personas con derecho a voto conforme con la lista nominal, pues es el parámetro conforme al cual se determina el equilibrio poblacional en los distritos judiciales. En ese sentido, la votación total emitida es un referente que permite llegar a resultados más representativos que la votación válida emitida, pues utiliza valores más cercanos al óptimo.

Por otro lado, no existe base de hecho ni de derecho para concluir que los votos nulos considerados en abstracto supongan rechazo de las personas ciudadanas que acuden a la casilla a votar. Esto, pues conforme al principio de primacía de la realidad[25], la anulación de un voto puede tener varias causas como la confusión, el error, el olvido, o la imposibilidad de elegir alguna opción entre las múltiples que se presentan en una elección inédita y compleja como la judicial. El rechazo a las candidaturas que se presentan a una elección puede determinarse con certeza a partir de elementos objetivos como expresiones de repudio en la boleta, no obstante, resulta inverosímil que todas las boletas que fueron calificadas como votos nulos estuvieran en ese supuesto y no hay ninguna evidencia de tal situación.

En esas condiciones, el argumento no es adecuado para sostener que en el caso concreto no debieron utilizarse los votos nulos para calcular el

[25] La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha utilizado este principio como una derivación del tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en diversos asuntos como el que derivó en la tesis *2a./J. 96/2019* de rubro siguiente: ***TRABAJADORA EMBARAZADA. SI EL PATRÓN SE EXCEPCIONA ADUCIENDO QUE LA ACTORA RENUNCIÓ Y ÉSTA DEMUESTRA QUE AL MOMENTO DE CONCLUIR EL VÍNCULO LABORAL ESTABA EMBARAZADA, EL SOLO ESCRITO DE RENUNCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR QUE FUE LIBRE Y ESPONTÁNEA.***

El principio de primacía de la realidad básicamente consiste en ponderar las circunstancias vinculadas con el asunto de que se trate, tal y como ocurren realmente con el fin de mejorar la calidad de las decisiones.

porcentaje de votación de los candidatos en cada distrito en que participaron, sino solamente la votación válida de todas las candidaturas contendientes.

La Actora plantea que son aplicables al caso las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, según las cuales, la votación total válida es el resultado de restar a la votación total emitida los votos nulos.

El planteamiento es infundado porque los artículos de las leyes de referencia que cita la Actora son aplicables para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, esquema normativo que no presenta semejanzas jurídicas sustanciales con la temática motivo de análisis.

La Actora cita el artículo 15, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que define la votación válida emitida para efectos de la fracción II del artículo 54 de la Constitución. El artículo 54 de la Constitución Federal trata sobre las diputaciones federales de representación proporcional, y la fracción II en específico, señala que debe usarse la votación total emitida para calcular el porcentaje de votación necesario para participar en la distribución de diputaciones por representación proporcional. El artículo 238 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala establece reglas para la asignación de diputaciones por representación proporcional en el Estado.

Las normas invocadas por la Actora no son aplicables al caso que se resuelve porque los diseños de asignación por representación proporcional a nivel federal y en Tlaxcala se hacen a partir de listas de candidaturas presentadas por los partidos políticos. En el caso, se trata de establecer el tipo de votación para calcular el porcentaje de votación de candidaturas que participaron en distritos diversos en los que el cargo se asigna al participante que obtuvo la mayor cantidad de votos. El objetivo es utilizar un método que permita determinar cuál de las dos candidaturas que se comparan en más representativa en las condiciones en que contendieron en sus respectivos distritos.

La asignación de diputaciones por representación proporcional tiene como base la suma de los votos por partido político obtenidos en todas las demarcaciones distritales de la circunscripción nacional o del estado de Tlaxcala. En el asunto que se resuelve, se considera la votación de cada distrito judicial para compararla con la votación de otro distrito judicial.

La asignación de diputaciones por representación proporcional tiene como fin distribuir escaños en función de los porcentajes de votación obtenidos por los partidos políticos participantes. En el asunto de que se trata, se busca obtener un porcentaje de votación de candidatos que contendieron por el principio de mayoría relativa en dos distritos independientes con el fin de determinar cuál candidatura es más representativa y así justificar el desplazamiento de una de ellas a favor de una mujer para cumplir con el principio de paridad de género.

Lo expuesto permite concluir que, bajo las circunstancias del caso en estudio, la votación válida emitida no es adecuada para calcular la representatividad real de las candidaturas más votadas en distritos judiciales no equivalentes.

Lo razonado hasta este punto atiende de forma sustancial los planteamientos de la Actora. Sin embargo, con el fin de cumplir con el principio de exhaustividad, a continuación, se atiende el escrito de demanda desde diversos enfoques razonablemente posibles.

Inconstitucionalidad del artículo 15 de los Lineamientos de asignación.

La Actora expresa en su demanda que el artículo 15 de los Lineamientos de asignación es contrario a la Constitución por ir en contra de las disposiciones provenientes del cuerpo legislativo democrático que establecen que la asignación de cargos debe hacerse entre las candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos. Esto porque conforme con el artículo 15, el ajuste de paridad debe hacerse en la candidatura de hombre con menor porcentaje de votación emitida en la elección de que se trate; es decir, el desplazamiento se realizará en el candidato con menor porcentaje de votación calculada conforme con la votación total emitida y no de acuerdo a lo planteado por la Actora, esto es, con el número de votos de cada

candidato, o en su caso, conforme con el porcentaje de votación sobre la base de la votación total válida. El artículo de referencia dispone a la letra lo que sigue:

> *Artículo 15. Si de la verificación anterior, se advierte que no se cumple la paridad de género vertical, se procederá a realizar los ajustes necesarios, asignando la vacante del cargo a la mujer con mayor número de votos, de la elección del mismo cargo, materia o especialización y ámbito territorial electivo donde se encuentre el hombre con el menor porcentaje de votación emitida en la elección respectiva.*

Al respecto, se precisa que, como se demostró, el caso a resolver no quebranta la directriz normativa prevista en las constituciones federal y local, ni en las leyes electorales general y local.

La conclusión anterior porque el punto de debate no se centra en la asignación de cargos judiciales entre las candidaturas más votadas, sino en determinar el criterio conforme al cual debe aplicarse un ajuste de paridad por haber sido dos hombres quienes obtuvieron la mayor cantidad de votos en los distritos en los que contendieron, por lo cual debe desplazarse a uno de los candidatos para asignar el cargo judicial a la mujer más votada.

En efecto, en lo específico se sometió al voto popular una vacante de juzgado de la especialidad civil en el distrito judicial de Cuauhtémoc y otra vacante en el distrito judicial de Zaragoza. Las reglas de asignación establecen que en elecciones de una sola vacante se asignará, en principio, a la candidatura más votada, lo cual es consistente con la norma derivada de la Constitución y las leyes, de que la asignación de cargos se hará a las candidaturas más votadas.

La asignación de cargos por disposición constitucional y legal debe ajustarse al principio de paridad. En ese sentido, la asignación de dos hombres en dos cargos de personas juzgadoras de una sola especialidad no es consistente con el principio de paridad, por lo que el ITE determinó que, en tales casos, debía realizar un ajuste consistente en desplazar a uno de los candidatos para atribuir el cargo a la mujer más votada en la demarcación.

Así, el punto de controversia se centra en el método o mecanismo para determinar al candidato que soportará el ajuste de paridad, por lo que no se trata del caso de asignar el cargo a la candidatura más votada. En tales condiciones, el artículo 15 de los Lineamientos de asignación no transgrede la regla constitucional y legal de que la asignación de cargos se haga entre las candidaturas con mayor número de votos. Esto porque tal regla se cumplió al asignar el cargo a la candidatura más votada en cada uno de los dos distritos. Lo que sucedió es que, como fueron dos hombres quienes accedieron el cargo, debía realizarse un ajuste para cumplir con el principio de paridad.

En esa lógica, una vez determinado el criterio para determinar al candidato que deba desplazarse, la asignación del cargo se hace a la mujer más votada en el distrito en el que se hizo el ajuste, con lo que se atiende a la regla constitucional y legal que la Actora asume transgredida.

Además, el criterio de ajuste del ITE, basado en el cálculo porcentual de la votación de cada candidatura con base en la votación total emitida, toma en cuenta la votación de las candidaturas respecto a los votos emitidos en cada distrito para medir la representatividad real y desplazar al candidato con menor porcentaje, lo que no se aleja de la directriz normativa invocada por la Actora en cuanto pondera las votaciones en ambos distritos, salvando a la más representativa.

En relación con el cálculo del porcentaje conforme a la votación total emitida, ya se demostró que se trata de un referente que arroja resultados más representativos que utilizando la votación válida emitida, por lo que no violenta el derecho al cargo de las candidaturas involucradas, ni el principio democrático en el aspecto de preeminencia de la voluntad mayoritaria.

En este punto conviene precisar que el ITE funda el criterio para realizar el ajuste de paridad en la interpretación del inciso d) del criterio 3 de los Criterios de paridad, y en los artículos 3, fracción XXVII, 14 y 15 de los Lineamientos de asignación, bajo la directriz del deber de salvaguardar la igualdad del voto y solventar las distorsiones producidas por la diferencia desproporcionada entre el número de personas inscritas en la lista nominal de los dos distritos a comparar.

En efecto, en la parte correspondiente del Acuerdo impugnado, el ITE constata que las dos candidaturas vacantes en los distritos de Cuauhtémoc y Zaragoza fueron asignadas a hombres. Luego, cita el inciso d) del criterio 3 de los Criterios de paridad, y los artículos 14 y 15 de los Lineamientos de asignación para sostener que *se procederá a realizar los ajustes necesarios, asignando las vacantes correspondientes a las mujeres con mayor número de votos, iniciando por el hombre con el menor porcentaje de votación total emitida en la elección respectiva*. Las disposiciones de que se trata señalan expresamente lo siguiente:

> *Criterio 3. Para la asignación de las Juezas y Jueces cuyo ámbito territorial electivo es distrital, se observará lo siguiente:*
>
> *[…]*
>
> *d) Se realizará una verificación de paridad de género del total de cargos de juezas y jueces asignados inicialmente por ámbito territorial electivo. Si del ejercicio se advirtiera que es mayor el número de jueces en el ámbito territorial electivo, sobrerrepresentándose los hombres, podrán realizarse los ajustes necesarios con la finalidad de garantizar la paridad de género, asignándose la vacante del cargo a la mujer con mayor número de votos en la materia o especialización respectiva. El ajuste deberá iniciar por los hombres con menor número de votos de los cargos de una sola vacante.*
>
> *CAPÍTULO TERCERO DE LA VERIFICACIÓN DE PARIDAD DE GÉNERO*
>
> *Artículo 14. Una vez realizada la asignación inicial, se verificará la paridad de género vertical de conformidad con los Criterios de paridad.*
>
> *Artículo 15. Si de la verificación anterior, se advierte que no se cumple la paridad de género vertical, se procederá a realizar los ajustes necesarios, asignando la vacante del cargo a la mujer con mayor número de votos, de la elección del mismo cargo, materia o especialización y ámbito territorial electivo donde se encuentre el hombre con el menor porcentaje de votación emitida en la elección respectiva.*

A continuación, el ITE da cuenta de que los distritos judiciales no se conformaron de acuerdo con el criterio de equilibrio poblacional, por lo que el número de votos obtenidos podría variar en los distritos. Ante lo cual, del Acuerdo impugnado se desprende que el ITE decide utilizar el criterio porcentual para salvaguardar la igualdad del voto y por constituir un

elemento objetivo que permite comparar adecuadamente las votaciones de las candidaturas, minimizando las distorsiones provocadas por las diferencias en el número de personas ciudadanas y la participación electoral en cada distrito. Luego, se cita la tesis *LXXIX/2002*, de rubro: GEOGRAFÍA ELECTORAL. CONCEPTO Y PROPÓSITOS, que explica las variables que se ponderan en la conformación de los distritos electorales.

Después, se cita la fracción XXVII del artículo 3 de los Lineamientos de asignación, que señala que la votación total emitida se entiende como la suma de todos los votos depositados en las urnas de la elección de que se trate. Finalmente, se compara el porcentaje de los candidatos hombres calculado con base en la votación total emitida para determinar sobre quién recaería el ajuste de paridad.

Como se puede advertir, el ITE adoptó el criterio para realizar el ajuste de paridad en diversas disposiciones reglamentarias y en el principio de igualdad en el voto, así como en la finalidad positiva de atenuar los efectos de las distorsiones producidas por las diferencias en el número de personas ciudadanas entre los distritos y en la diversa participación electoral.

El ITE realizó una interpretación sistemática y funcional de diversas disposiciones para ajustar la determinación a las condiciones del caso concreto, pues advirtió que los distritos judiciales no se conformaron con base en el criterio de equilibrio poblacional, por lo que lo adecuado fue realizar un cálculo porcentual. Por tanto, el criterio del Acuerdo impugnado no se fundó solamente en el artículo 15 de los Lineamientos de asignación, aunque dicha disposición concentra la norma según la cual, se asignará la vacante a la mujer con mayor número de votos, haciendo el ajuste en el distrito donde se encuentre el hombre con menor porcentaje de votación emitida.

La Actora, en el desarrollo del argumento construido para combatir el criterio porcentual del ITE, resalta que el inciso d) del criterio 3 de los argumentos de paridad es congruente con la Constitución y la ley en cuanto señala que el ajuste de paridad se realizará en los hombres con el menor número de votos en los cargos con una sola vacante. A continuación, la Actora señala que indebidamente el ITE estableció una nueva regla en el artículo 15 de los

Lineamientos de asignación, lo cual no era necesario porque los Criterios de paridad resolvían la cuestión adecuadamente.

Al respecto, se destaca que efectivamente, los Lineamientos de asignación se emitieron con posterioridad a los Criterios de paridad y en ellos se introdujo la disposición que prevé la utilización del criterio porcentual con base en la votación emitida en casos donde deban hacerse ajustes en casos de vacantes en elecciones de la misma materia o especialización.

Los Lineamientos de asignación establecen reglas nuevas en esa temática y en sus artículos hacen referencia a los Criterios de paridad[26], lo cual constituye un elemento objetivo para establecer que se trata de decisiones reglamentarias complementarias o adicionales a las anteriores en el entendido que fueron emitidas con posterioridad.

En esas condiciones, más allá del argumento de consistencia formal de las diversas disposiciones reglamentarias, de acuerdo con el análisis material o sustancial realizado con anterioridad, el criterio porcentual con base en la votación total emitida es más adecuado para resolver el asunto en estudio, que el criterio con base en el número de votos o el porcentual con base en la votación válida emitida.

Así, las normas reglamentarias aceptan una interpretación para resolver el caso conforme con un cálculo porcentual con base en la votación total emitida, pues permite hacer comparables las votaciones obtenidas por los candidatos en las circunstancias diferenciadas en que contendieron en la elección.

Por las razones expuestas, no procede declarar la inconstitucionalidad del artículo 15 de los Lineamientos de asignación.

Transgresión de los principios de la función electoral.

Por lo que se refiere al argumento de la parte actora, en el sentido de que el acuerdo impugnado vulnera en su perjuicio los Principios de Legalidad, Certeza, Exhaustividad, Profesionalismo y Constitucionalidad, a

[26] En los artículo 2, fracción X, 7, párrafo último, 13 y 14.

consideración de este Tribunal no le asiste la razón a la inconforme. Se explica por qué.

Al respecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 41, fracción V, apartado A, párrafo primero e inciso b) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal, en lo que a este asunto atañe, se establece que son aplicables los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, profesionalismo; además de que también son aplicables los principios de exhaustividad y, sobre todo, de constitucionalidad.

De los anteriores principios, en el criterio Interpretativo establecido en la tesis de jurisprudencia *P./J. 144/2005*, cuyo rubro es **"FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.**[27]**"** Se estableció lo siguiente:

El principio de legalidad es la garantía formal para que las personas ciudadanas y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. El principio de imparcialidad consiste en que, en el ejercicio de sus funciones, las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la parcialidad. El principio de certeza consiste en dotar de

[27] ***"FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.*** *La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral* ***el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo;*** *el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y* ***el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.*** *Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.*

facultades expresas a las autoridades electorales de modo que todas las personas participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a las que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.

En las condiciones referidas, se considera que dichos principios fueron respetados por el ITE, de acuerdo con los razonamientos siguientes:

Principio de certeza.

Para la realización de este principio, se parte de la premisa de que todas las personas participantes en el proceso electoral respectivo conozcan previamente, con claridad y seguridad, las reglas a las que su propia actuación y la de las autoridades electorales estarán sujetas.

Lo que, a consideración de este Tribunal, se cumplió, en virtud de que, con antelación a la asignación de cargos de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, electas en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, tanto autoridades como personas ciudadanas, estuvieron en aptitud de conocer con claridad y precisión, las reglas que se debían seguir para tal fin, precisamente, al haberse expedido los Criterios de paridad y los Lineamientos de asignación.

Principio de legalidad.

En el presente asunto, esta garantía formal respecto del proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado impone tanto a las personas candidatas que participaron, como a las autoridades administrativas electorales locales, el deber de actuar en estricto apego a las disposiciones consignadas en la normativa, para que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

En este sentido, para su cumplimiento, se parte de la preexistencia de un marco normativo de aplicación y observancia general al que todas las personas ciudadanas –incluida la actora- y las autoridades

administrativas electorales locales, deben sujetarse, con la finalidad de que se garantice una actuación apegada a la norma.

En la especie, ese principio de legalidad se cumplió, en virtud de que la autoridad administrativa electoral local, se sujetó al marco normativo, que fue emitido, desde la Constitución Federal, la Constitución Local, así como las Leyes Electorales, tanto General como Local, pues de acuerdo con lo razonado en esta sentencia, el ITE asignó los cargos de personas juzgadoras en materia civil entre las candidaturas con mayor número de votos en armonía con el principio de paridad.

Principio de imparcialidad.

Este principio es aplicable al ejercicio de las funciones de las autoridades electorales y tiene como finalidad evitar irregularidades, desviaciones o la proclividad indebida, de la cual se advierte que quedó satisfecho, en virtud de que la actora no argumentó haber recibido un trato diferenciado, no acusó la existencia de conductas desequilibradas que hubiera realizado la autoridad responsable, ni se advierte tal circunstancia de lo que obra en el expediente.

Principio de exhaustividad.

Este principio genera la obligación para las autoridades electorales –administrativas y jurisdiccionales-, de resolver los planteamientos de la ciudadanía, atendiendo a la totalidad de las pretensiones y argumentos, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, según lo ha determinado la Sala Superior en las jurisprudencias números: 43/2002, de rubro **PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.,** y 12/2001 de rubro **EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.** [28].

[28] **PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN** Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones

Así, a consideración de este Tribunal, dicho principio quedó satisfecho, pues no se advierte que el ITE hubiera dejado de atender alguna pretensión o planteamiento de la impugnante ni que hubiera dejado de apreciar o valorar alguna prueba que tuviera a su alcance, en detrimento de la Actora, pues, por el contrario, para fijar el criterio para realizar el ajuste de paridad, analizó todo el contexto que rodea a la asignación de cargos en los Distritos Judiciales de Cuauhtémoc y Zaragoza, ambos del Poder Judicial del Estado.

Principio de Profesionalismo

Este principio impone a las autoridades electorales que los asuntos de su competencia sean atendidos por personas que se encuentran capacitadas profesionalmente para ello, con los conocimientos suficientes y la pericia necesaria para atenderlos. De lo anterior, este Tribunal considera que este principio se ha cumplido, pues de lo que obra en el expediente, no se aprecia prueba alguna que acredite, aunque sea de forma indiciaria, que las autoridades del ITE hubieran actuado con falta de profesionalismo, o con desconocimiento de la norma, impericia o negligencia.

sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consultable en la dirección electrónica:
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=43/2002&tpoBusqueda=S&sWord=exhaustividad

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.- Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.

Consultable en la dirección electrónica:

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2001&tpoBusqueda=S&sWord=exhaustividad

Principio de Constitucionalidad.

Este principio se encuentra directamente relacionado con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Federal, pues establece que dicha Carta Magna, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por la persona titular de la Presidencia de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

A lo anterior se le conoce como principio de supremacía constitucional, que se traduce en que las normas de carácter secundario, así como el sistema jurídico de las entidades federativas, deben ajustarse a lo que esos cuerpos normativos superiores establecen y, por ende, el principio de Constitucionalidad implica que los actos de autoridad estén acordes con dicha normatividad.

En este sentido, si se considera que ya ha quedado razonado que el acto impugnado emitido por el ITE se encuentra ajustado a la Constitución, y que se cumplió con lo que la norma dispone, es indudable que se cumplió el Principio de Constitucionalidad.

Todo lo expuesto lleva a la conclusión de que el agravio de la Actora no tiene la entidad suficiente para alcanzar su pretensión de que se le asigne el cargo de jueza en el distrito judicial electoral de Zaragoza. Por lo tanto, debe prevalecer el criterio fijado por el ITE para justificar la medida de ajuste de paridad, esto es, conforme con el parámetro porcentual calculado con base en la votación total emitida. Esto por las siguientes razones:

- **El parámetro porcentual con base en la votación total emitida es un mecanismo más adecuado de medición de la representatividad que el basado en la votación total válida.**

- **El criterio se realiza con base en un tipo de votación, en el caso, de todas las personas ciudadanas que acudieron a las urnas a expresar el sentido de su voto.**

- **El criterio de medición de la representatividad porcentual con base en la votación total emitida se adoptó por el ITE en ejercicio de sus facultades para reglamentar las actividades del proceso electoral de personas juzgadoras en Tlaxcala contenido en el artículo 422, fracciones II y XIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. La reforma constitucional local en materia de reforma judicial otorgó expresamente la competencia directa al ITE para la organización, desarrollo, cómputo y vigilancia del proceso judicial electoral extraordinario, con lo que se ensanchó cualitativamente la facultad reglamentaria de la autoridad electoral en esa materia[29]. La libertad de configuración en la temática de que se trata es amplia porque la legislación no establece reglas específicas de paridad a aplicarse en casos de personas juzgadoras que contienden en distritos diversos, por lo que el margen de apreciación de la autoridad electoral administrativa es amplio.**
- **La decisión de este Tribunal se encuentra dentro de los límites de la controversia a resolver, en cuanto el planteamiento de la Actora se centró en que el referente que debió tomarse para comparar las candidaturas de hombres más votadas en sus distritos es el número de votos, o en su caso, el porcentaje de votación, pero sobre la base de la votación válida emitida en lugar de la votación total válida.**
- **El fallo respeta el principio de conservación de los actos válidamente celebrados, en el entendido de que la presunción de validez del criterio controvertido no fue derrotada por los planteamientos de la Actora y de que se funda en parámetros o referentes que se hallan dentro de los límites de la libertad de configuración reglamentaria del ITE.**

También se estima indispensable precisar que **la decisión no transgrede el principio de paridad de género en perjuicio de la Actora**, pues fue

[29] El párrafo quinto del artículo segundo transitorio del decreto de reformar a la Constitución de Tlaxcala en materia de reforma judicial estableció que el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo y vigilancia del proceso electoral extraordinario del año 2025 y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables. La Sala Superior estableció un criterio semejante en relación a la elección judicial federal al resolver el juicio SUP-JE-0162/2025.

paritaria la integración de los cargos de personas juzgadoras especializadas en materia civil, ya que se asignó un hombre y una mujer. Esto en el entendido de que la pretensión de la Actora no incide sobre la conformación paritaria de que se trata, pues tiene el objetivo de cambiar el distrito en el que se desplazó la candidatura masculina para que ella accediera al cargo como candidata más votada, quedando en el otro distrito el candidato más votado.

Al respecto, es importante precisar que, en el caso, la candidata con mejor porcentaje de votación en su distrito es la del distrito de Cuauhtémoc.

Candidata	Distrito	Votación	Porcentaje de votación total válida[30]	Porcentaje de votación total emitida
Angélica Flores Vázquez	Cuauhtémoc	17,172	30.05%	22.03%
Laura Marcela Ramos Vela	Zaragoza	4,746	25.59%	19.85%

Finalmente, no pasa desapercibido para este Tribunal que las personas terceras interesadas que se apersonaron en este juicio, realizaron diversas manifestaciones respecto del agravio expresado por la actora; no obstante, partiendo de la premisa de que el sentido de la presente resolución es confirmar el acuerdo recurrido en lo que fue materia de impugnación, es que se considera que a ningún fin práctico conduciría realizar mayores manifestaciones al respecto, en virtud de que han alcanzado su pretensión.

Conclusión.

En las relatadas condiciones, este Tribunal considera que no le asiste la razón a la Actora respecto de los problemas jurídicos planteados, por lo que el agravio que formuló **es infundado**; por ello, lo procedente es **confirmar el acuerdo ITE-CG 67/2025**, en lo que fue materia de impugnación, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría otorgadas a las candidaturas asignadas en los cargos de juez y jueza en materia civil en los distritos judiciales electorales de Zacatelco y Cuauhtémoc.

[30] Los datos de votos nulos y válidos por distrito se obtuvieron de los datos que se encuentran en el Acuerdo impugnado.

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara infundado el agravio expresado por la actora y, por ende, se confirma el acuerdo ITE-CG 67/2025, en lo que fue materia de impugnación, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas.

SEGUNDO. En su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59, 62, 64 y 65 de la Ley de Medios; **con copia cotejada de la presente resolución, notifíquese:** de manera personal a la parte actora en el domicilio señalado en actuaciones para tal fin; mediante oficio a la autoridad responsable en su domicilio oficial; a las personas terceras interesadas en los domicilios señalados en actuaciones; y a toda persona que tenga interés en el presente asunto, mediante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal. **Cúmplase.**

En su oportunidad, agréguense a los autos las constancias de notificación correspondientes.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por unanimidad de votos de las Magistradas y el Magistrado que lo integran, ante el Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MIGUEL NAVA XOCHITIOTZI
MAGISTRADO PRESIDENTE

JORGE EDUARDO GALINDO RAMOS
MAGISTRADO
POR MINISTERIO DE LEY

CLAUDIA SALVADOR ANGEL
MAGISTRADA

IVAN RUIZ SÁNCHEZ
SECRETARIO DE ACUERDOS
POR MINISTERIO DE LEY